 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 1 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

TRAZABILIDAD	2019-GC-024
EXPEDIENTE	PRF-2020-00041
CUN SIREF	AC-80763-2020-28843
ENTIDAD AFECTADA	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA
PRESUNTOS RESPONSABLES	<ul style="list-style-type: none">• FELIX SUAREZ REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.485.434, en calidad de Rector en propiedad de conformidad a la Resolución del Consejo Superior No. 09 del 23 de diciembre de 2015, periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2015 al 19 de febrero de 2016.• ENVER MOSQUERA HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No 16.499.840 en calidad de Director Administrativo y financiero nombramiento en planta de conformidad a la Resolución No.231 del 27de marzo de 2015, periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2015 al 24 de febrero del 2016.• FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No 66.943.241 en calidad de tesorera, nombramiento en (ENCARGO) de conformidad a la Resolución No 2040 del 5 de mayo de 2015, Resolución No 310 del 16 de julio de 2015, Resolución No 317 del 21 de julio de 2015, Resolución No 002 del 2 de enero de 2016 periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2015 hasta el 23 de marzo de 2016.
TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES	Compañía aseguradora: Compañía de Seguros la Previsora S.A., NIT 860-002.400-2 póliza No: 3000075, vigencia de la póliza: 14-07- 2015 al 14-07-2016, riesgos amparados: Cobertura de manejo oficial, Delitos contra la administración pública, fallos con responsabilidad fiscal, Valor asegurado: \$ 25.000.000, Fecha expedición de la póliza: 14-07-2015.
CUANTÍA ESTIMADA DEL DAÑO PATRIMONIAL	TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS MCTE (\$13.030.000)
DIRECTIVO PONENTE	EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO

ASUNTO

Procede la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, de la Contraloría General de la Republica a proferir Fallo con Responsabilidad Fiscal en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario No. PRF- 2020-00041 con ocasión del daño patrimonial sufrido por la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA.

COMPETENCIA

Nuestro ordenamiento jurídico estipula que el control fiscal es una función pública que será ejercida por la Contraloría General de la República; así lo establece el

artículo 267 de la Constitución Nacional, concordante con el numeral 5 del artículo 268, el cual faculta al Contralor General de la República para establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000, en concordancia con la Sentencia de la H. Corte Constitucional C-403 de 1999 establecen que la Contraloría General de la República tendrá control prevalente y concurrente, respecto a la vigilancia de la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.

De igual forma, la Ley 610 de 2000 preceptúa que la Contraloría General de la República tiene competencia prevalente para adelantar hasta su culminación los procesos de responsabilidad fiscal que se originen en ejercicio del control fiscal. En similar sentido, la Ley 1474 de 2011 ha establecido la competencia de este órgano de control para el conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal y la Resolución 0748-2020 de 26 de febrero de 2020 relacionadas con la distribución de competencias interna; así como el Auto No 042 de febrero 6 del 2020 por el cual esta Colegiatura avocó conocimiento del presente asunto.


Para el caso puntual, se revisará si la Universidad del pacifico es Sujeto de Control de la Contraloría General de la República. Al respecto, La ley 65 de 1988 mediante la cual se creó el establecimiento público Universidad del Pacifico, en su artículo noveno estipulo “(...) **Artículo 9º.** *La Contraloría General de la República, ejercerá la vigilancia fiscal de la Universidad (...).*”

Para establecer la competencia de esta Gerencia Departamental se debe evaluar lo reglado mediante el artículo 11 de la Resolución Organizacional OGZ-0764-2020 de 2020, proferida por la Contraloría General de la República en el cual se dispone lo siguiente:

“Modificar el artículo 3o de la Resolución Organizacional OGZ número 748 de 2020, la cual quedará así:

“Artículo 3o. Dependencias competentes para adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal. Las dependencias competentes para conocer, tramitar y decidir el proceso de responsabilidad fiscal que corresponde adelantar a la Contraloría General de la República, de acuerdo con los factores de competencia que más adelante se enuncian, son las siguientes:

- 1. Despacho del Contralor General*
- 2. Sala Fiscal y Sancionatoria*
- 3. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción*
- 4. Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías*
- 5. Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo*
- 6. Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo*
- 7. Direcciones de Investigaciones de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo*
- 8. Gerencias Departamentales Colegiadas”.*

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 3 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

Igualmente se debe evaluar lo preceptuado por el artículo 12 de la Resolución REG-OGZ0748-2020 del 26 de febrero de 2020, proferida por la Contraloría General de la República en el cual se dispone lo siguiente: *“Para la determinación de la competencia para el trámite de la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad al interior de la Contraloría General de la República, se tendrán en cuenta los siguientes factores:*

- 1. Factor Territorial: Lugar en donde se ejecutaron o debieron ejecutar los recursos públicos. Para los efectos de la presente resolución, el factor territorial se refiere a la ejecución presupuestal de los recursos públicos.”*

Finalmente, el artículo 23 de la precitada normatividad señala:

“Las Gerencias Departamentales Colegiadas conocerán de los siguientes asuntos:

- 4. En primera o única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que deban tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por las entidades del orden territorial y descentralizadas por servicios.” (Subrayado extra texto)*

El caso que hoy nos ocupa se trata de recursos de naturaleza pública del orden nacional, ejecutados por la Universidad del Pacífico en el Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca.

Por todo lo anterior, se concluye que es clara la competencia legal de esta Gerencia Departamental para proferir Fallo en el presente caso.

ANTECEDENTE

Lo constituye el hallazgo No. 72425 como resultado de la auditoría integral practicada a los recursos asignados a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA.


Mediante oficio No. 2019IE0055878 del 27 de junio de 2019, la doctora Jenny Rivera Camelo, Gerente Departamental, quien preside la colegiatura de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle, efectuó traslado del hallazgo para apertura de un Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Mediante Auto No. 042 del 6 de febrero de 2020, se dio apertura del PRF-2020-00041, Auto proyectado la Profesional Universitaria Mónica Fernanda Gómez y aprobado por el Directivo Ponente Diego Fernando Durango Hernández.

Mediante Auto No. 447 del 29 de junio de 2021, Auto por el cual se avoca conocimiento dentro del PRF-2020-00041, se designó la sustanciación del PRF a la Profesional Universitaria Mónica Fernanda Gómez Salazar.

Mediante Auto No. 811 del 19 de noviembre de 2021, Auto por el cual se avoca conocimiento y se reasigna la sustanciación del PRF-2020-00041, se designó al Profesional Universitario Lorenzo Millán Gil.

Mediante Auto No. 097 del 18 de febrero de 2022, Auto por el cual se avoca conocimiento y se reasigna la sustanciación del PRF-2020-00041, se designó al Profesional Universitario Héctor Mario Duran Vahos.

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 4 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

Mediante Auto No. 309 del 9 de mayo de 2022, Auto de asignación de sustanciador dentro del PRF-2020-00041, se designó al Profesional Universitario Diego Javier Zamora Lozano.

Mediante Auto No. 074 del 20 de febrero de 2023, Auto por medio del cual se avoca conocimiento de una indagación preliminar y varios procesos de responsabilidad fiscal, se avocó conocimiento de la ponencia y se designó como directiva ponente del PRF-2020-00041 a la Doctora Martha Cecilia Lara Lozano.

Mediante Auto No. 137 del 07 de marzo de 2023, Auto por medio del cual se avoca conocimiento de una indagación preliminar y varios procesos de responsabilidad fiscal, se avocó conocimiento de la ponencia y se designó como directivo ponente del PRF-2020-00041 al señor John Jairo Girón Bermúdez.

Mediante Auto No. 009 del 18 de enero de 2024, Auto por medio del cual se avoca conocimiento de varios procesos de responsabilidad fiscal, se avocó conocimiento de la ponencia y se designó como directivo ponente del PRF-2020-00041 al Doctor Earld Hernando Tejeda Quintero.

HECHOS

Dentro de la Auditoria con enfoque integral practicada a los recursos destinados al financiamiento de la prestación del servicio público de educación superior practicada a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO –UNPA, se señaló como hecho irregular objeto de cuestionamiento fiscal, lo siguiente:

“(…) Realizada la verificación del reporte de las partidas conciliatorias, cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente se observó que se debitó, en la vigencia 2017, \$102.572.219 y entre los meses de noviembre y diciembre del 2018, se causa en contabilidad dicho valor, sin que se evidencia registro presupuestal que respalde la autorización del gasto mediante CDP y RP, por concepto gastos de tarjeta de crédito, por lo anterior, en vista de campo se solicitaron los soportes de legalización por este concepto, y según contra en acta de fecha abril 3 del 2019, el contador de la Universidad del Pacífico, manifiesta que, desde su ingreso en noviembre del 2017, solicitó al tesorero del momento los respectivos soportes, pero a la fecha no se ha entregado la información que legalice el gasto.

Igualmente, mediante certificación suscrita por la Secretaria General, se manifiesta que: "Una vez revisados los archivos para el año 2017 a Universidad del Pacífico contaba con 2 tarjetas de crédito una visa No. 491330-4007376-688 y otra mastercard No. 558772-5619832-902 del Banco de Occidente, que fueron manejados en dicha vigencia por dos ex rectores; no obstante; por Secretaria General no se encontró ningún acto administrativo que reglamentara el uso de las tarjetas de crédito en mención, pero se evidencia que su uso era para gastos de representación". No se suministran soportes de legalización."

De otro lado, con el fin de obtener las evidencias necesarias, se solicitó al Banco de Occidente la relación de las tarjetas de crédito a nombre de la Universidad y copia de los extractos, lográndose establecer que, no son 2, sino 20, las Tarjetas de Crédito expedidas por el Banco de Occidente, todas con un cupo asignado de

\$10.000.000. De la revisión de los extractos, se evidencian pagos, con recursos públicos, por \$333.890.094.

El hallazgo trasladado es en razón al pago de consumos de tarjetas de crédito a cargo de quienes fueron rectores durante las vigencias 2014 hasta abril de 2019 realizados con recursos de la Universidad del pacifico, lo que generó erogaciones por valor de TRESCIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y CUATRO moneda corriente (\$333.890.094).

Con el fin de efectuar un correcto control fiscal y para cumplir con el requisito de unidad procesal con respecto a los presuntos responsables fiscales, se hace necesario desagregar cada uno de estos pagos efectuados, de acuerdo a los presuntos responsables fiscales a vincular en el Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Los hechos objeto de reproche fiscal dentro de la presente investigación son: *"Con recursos destinados específicamente para la educación, se realizaron los siguientes pagos debitados automáticamente de la cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacifico, a los consumos de las tarjetas de crédito empresarial Nos. 4913306564897550 5587723056453563 a nombre de José Félix Riascos, las cuales son amparadas con la cuenta corriente de la Universidad del Pacífico No 030235501 del Banco de Occidente:*

Tarjeta No 4913306564897550

Fecha de pagos	Valor pagos realizados
24/12/2015	2.850.000
05/01/2016	945.000
Total pagado	\$3.795.000

Tarjeta No 5587723056453563

Fecha de pagos	Valor de pagos realizados
24/12/2015	9.000.000
05/01/2016	235.000
Total pagado	\$9.235.000

Pagos que generaron un presunto detrimento patrimonial a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-UNPA por un valor de TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS MTCE (\$13.030.000)".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente actuación se adelanta en virtud de la competencia atribuida a este Ente de control y a la normativa que a continuación se enuncia:

- 1. **Constitución Política de Colombia** en sus artículos 267 y 268 numeral 5, los cuales prescriben que la vigilancia de la gestión fiscal compete a la Contraloría General de la República, y que es atribución del Contralor establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.
- 2. **Ley 42 de 1993**, donde se establece en su artículo 8° que La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales y el artículo 49 que contempla que la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

3. **Decreto Ley 267 de 2000**, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República.

4. **Ley 610 de 2000**, a través de la cual se fija el trámite de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal.

5. **Ley 1474 de 2011**, a partir del artículo 97, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, modificando parcialmente la ley 610 de 2000.

7. **Resolución Orgánica N° 6541** de 18 de abril de 2012, por la cual se precisan y fijan las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República para el conocimiento y trámite del proceso de Responsabilidad Fiscal, en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011.

8. **Resolución Orgánica N° 0748 de 2020**, por la cual se modifica la Resolución Orgánica N° 6541 de 18 de abril de 2012.

9. **Ley 65 de 1988**, mediante la cual se creó el establecimiento público Universidad del Pacífico, en su artículo estipulo "(...) *Artículo 9°. La Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia fiscal de la Universidad (...).*"


NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA


Entidad:	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO - UNPA
Naturaleza Jurídica:	La Entidad afectada es la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO UNPA , 805.000.3000-4. La Ley 65 de 1988 crea la Universidad del Pacífico, como un establecimiento público nacional de carácter docente con personería jurídica y autonomía, de educación nacional. Su domicilio será la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, pero podrá establecer dependencias académicas en otras localidades del Litoral Pacífico.
Representante legal:	Representada legalmente por la Rectora RUTH SANCHEZ DE PEREA -Universidad del Pacifico -UNPA rectoria@unipacifico.edu.co notificacionjudicial@unipacifico.edu.co ruthsanchez@unipacifico.edu.co
Dirección	Km 13 vía al Aeropuerto Barrio el Triunfo Buenaventura – Valle del Cauca
Objeto Principal	Sus objetivos son: a) La formación científica, técnica y cultural a nivel superior en la Costa Pacífica. b) La investigación científica y técnica. c) Prestar asesoría técnica y científica en lo pertinente al desarrollo social, económico y ecológico de la Costa Pacífica y del país.

ACTUACIONES PROCESALES

No Y TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN / COMUNICACIÓN
AUTO No. 042 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2020, AUTO POR EL CUAL SE APERTURA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2020-00041	<ul style="list-style-type: none">○ FELIX SUAREZ REYES, NOTIFICADO POR AVISO EL 26/02/2020, ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20200227_DEVOLUCION_DILIGENCIAS_NOTIFICACION2020IE0019510○ ENVER MOSQUERA HURTADO, NOTIFICACION PERSONAL EL 17/02/2020 ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20200227_DEVOLUCION_DILIGENCIAS_NOTIFICACION2020IE0019510○ FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, NOTIFICACION PERSONAL EL 18/02/2020 ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20200227_DEVOLUCION_DILIGENCIAS_NOTIFICACION2020IE0019510"○ LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, COMUNICACIÓN DE VINCULACIÓN DE FECHA 11/02/2020 ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20200211_2020EE0016094"
VERSIONES LIBRES	<p>FELIX SUAREZ REYES, VERSION LIBRE DEL 15/04/2021, ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20210415_2021ER0045585_VERSIONLIBRE_FELIX_SUAREZ_REYES</p> <p>ENVER MOSQUERA HURTADO, VERSION LIBRE DEL 28/09/2020, ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20200928_2020ER0097879 VERSION LIBRE ENVERMOSQUERA.ZIP</p> <p>FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, VERSION LIBRE DEL 11/02/2021, ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20210211_2021ER0015070 VERSION LIBRE FLORANLLELYRUIZGARCIA.ZIP</p>
RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 0063 del 16 de marzo de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN TERMINOS PROCESALES A PARTIR DEL 16 DE	20200316_REG-EJE-0063-2020QUESUSPENDETERMINOS.

MARZO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020.	
RESOLUCUON REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 0064 DEL 30 DE MARZO DE 2020 “POR MEDIO DEL CAL SE SUSPENDEN TERMINOS PROCESALES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 HASTA NUEVA ORDEN.	20200330_RESOLUCION064SUSPENSIONDETERMINOS
RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 0067 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 0064 DEL 30 DE MARZO DE 2020	20200413_REG-EJE-0067-2020
RESOLUCION EJECUTIVA REGLAMENTARIA No. 0068 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 “POR LA CUAL SE CORRIGE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 0067 DE 2020.	20200413_REG-EJE-0068-2020
RESOLUCION EJECUTIVA REGLAMENTARIA No. 0070 DEL 1 DE JULIO DE 2020 “POR EL CUAL SE REANUDAN LOS TERMINOS PROCESALES A PARTIR DEL (15) DE JULIO DE 2020.	20200701_REG-EJE-0070-2020
AUTO No. 237 DEL 14 DE JULIO DE 2020 “POR EL CUAL SE ORDENA LA REANUDACION DE TERMINOS”.	VISIBLE EN EL ARCHIVO 20200714_AUTO237DELEVANTAMIENTODETERMINOSPROCESOS.

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 9 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	
AUTO No. 310 DEL 21 DE JULIO DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA UN PROFESIONAL PARA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2020-00041 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO 050-2020 DEL 29 DE JULIO DE 2020, VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20200804_ESTADO050-VALLEDEL CAUCA.
AUTO No. 048 DEL 02/02/2021, “POR EL CUAL SE PONE A DISPOSICION UN INFORME TECNICO DENTRO DEL PRF-2020-00041 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 020-2021 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021, VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20210205_ESTADO020-VALLE DELCAUCA.
RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 0081 DEL 25 DE MARZO DE 2021 “POR EL CUAL SE SUSPENDE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y TODAS LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES”.	
AUTO No. 447 DEL 29 DE JUNIO DEL 2021 “AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DENTRO DEL PRF-2020-00041”.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 101-2021 DEL 02 DE JULIO DE 2021, VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20210702_ESTADO101- VALLEDELCAUCA.PDF
AUTO No. 539 DEL 20 DE SAGOSTO DE 2021 “AUTO POR EL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PRF-2020-00041”.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 131-2021 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021, VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO 20210824_ESTADO131- VALLEDELCAUCA.PDF
AUTO No. 811 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, “AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE REASIGNA LA SUSTANCIACION DEL PRF-2020-00041”	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 002-2022 DEL 5 DE ENERO DE 2022, VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO ESTADO002VALLEDELCAUCA06DENERODE2022.P DF


 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 10 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	
AUTO No. 097 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022, “AUTO POR EL CUAL SE REASIGNA LA SUSTANCIACION DEL PRF-2020-00041.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 029-2022 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022, VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO ESTADO029-VALLEDELCAUCADEL-23DEFEBRERODE2022
AUTO No. 309 DEL 09 DE MAYO DE 2022, “AUTO POR EL CUAL SE DESIGNA LA SUSTANCIACION DEL PRF-2020-00041.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 082-2022 DEL 20 DE MAYO DE 2022, VISIBLE EN EL ARCHIVO
AUTO No. 673 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2020-00041	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 152-2024 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, VISIBLE EN EL ARCHIVO
AUTO No. 008 DEL 18 DE ENERO DE 2023, AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PRF-2020-00041.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 010-2023 DEL 24 DE ENERO DE 2023.
AUTO No. 074 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 “AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y DE VARIOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL”.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 029-2023 DEL 22 DE FEBRERO DE 2023.
AUTO No. 137 DEL 07 DE MARZO DE 2023 “AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y VARIOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL”.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 039-2023 DEL 09 DE MARZO DE 2023.
AUTO No. 184 DEL 21 DE MARZO DE 2023, AUTO DE IMPUTACIÓN	○ FELIX SUAREZ REYES, NOTIFICACION PERSONAL ELECTRONICA DEL 18/05/2023, ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles• Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PRF-2020-00041	<p>DENOMINADO “2023IE0064400 DEVOLUCION DILIGENCIAS PRF 2020-00041”</p> <ul style="list-style-type: none">○ ENVER MOSQUERA HURTADO, NOTIFICACION PERSONAL ELECTRONICA DEL 06/06/2023 ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO “2023IE0064400 DEVOLUCION DILIGENCIAS PRF 2020-00041”○ FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, NOTIFICACIÓN PERSONAL ELECTRÓNICA DEL 01/11/2023 ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO “2023IE0120132 DEVOLUCION DE DILIGENCIAS AUTO DE IMPUTACION NO_184 DEL 21032023_PRF-2020-00041”.○ LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, NOTIFICACIÓN PERSONAL ELECTRONICA DEL 10/05/2023 ACTUACION VISIBLE EN EL ARCHIVO DENOMINADO “2023IE0064400 DEVOLUCION DILIGENCIAS PRF 2020-00041”
AUTO No. 774 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2023, AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE PETICIÓN DE NULIDAD DENTRO DEL PRF-2020-00041.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 196-2023 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023
AUTO No. 009 DEL 18 DE ENERO DE 2024, AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE VARIOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 012-2024 DEL 22 DE ENERO DE 2024.
AUTO No. 113 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024, AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA Y SE NIEGA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PRF-2020-00041.	NOTIFICADO MEDIANTE ESTADO No. 037-2024 DEL 01 DE MARZO DE 2024.

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

El Antecedente trasladado, producto de la Auditoría con enfoque integral practicada a los recursos de la Universidad del Pacifico, tiene los siguientes documentos en DVD archivo PDF a detallar a continuación:

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 12 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

- Carpeta denominada 491330-6-564897550, la cual contiene los Extractos bancarios de la Tarjeta de crédito No 491330-6-564897550, del Banco de Occidente a nombre de José Félix Riascos.
- Carpeta denominada 558772-3-051453563, la cual contiene los Extractos bancarios de la Tarjeta de crédito No 558772-3-051453563, del Banco de Occidente a nombre de José Félix Riascos.
- Carpeta denominada HOJAS DE VIDA, que contiene los siguientes archivos: 4 búsqueda de BIENES SUAREZ REYES FELIZ, 6 búsqueda de Bienes MOSQUERA HURTADO ENVER, AG8-72-1-1-2-3 ENVER MOSQUERA, AG8-72-1-1-3-2 FELIX SUAREZ (2), AG8-72-1-1-3-3 FELIX SUAREZ (3), AG8-72-1-1-3-4 FELIX SUAREZ (4), AG8-72-1-1-3-5 FELIX SUAREZ, AG8-72-1-1-4-2 FLOR ANLLELY RUIZ, AG8-72-1-2- 1-2 ENVER MOSQUERA HURTADO, AG8-72-1-2-2-2 FELIX SUAREZ, AG8-72-1-2-3- 1 FLOR ANLLELY RUIZ, AG8-72-1-4-2-2 ENVER MOSQUERA HURTADO, AG8-72- 1-4-3-2 FELIX SUAREZ, AG8-72-1-4-4-1 FLOR ANLLELY RUIZ, AG8-72-1-5-2-2 ENVER MOSQUERA HURTADO, AG8-72-1-5-3-1 FLOR ANLLELY RUIZ, AG8-72-1-5- 4-2 FELIX SUAREZ, AG8-72-1-6-2 Manual de Funciones D. Financiero, AG8-72-1-6-3 Manual de Funciones Rector, AG8-72-1-6-4 Manual de Funciones Tesorero.
- Acta Contador
- Acta Tesorero
- ANEXO PARTIDAS CONCILIATORIAS
- CERTIFICACIÓN MENOR CUANTÍA
- COMUNICACION DE OBSERVACIONES (OBSERVACIÓN No. 14)
- HALLAZGO24 FORMATO TRALADOS FISCALES
- OFICIO ALCANCE CUANTIA DEFINITIVA HALLAZGO 24
- OFICIO ALCANCE H 14 COMUNICACION CUANTIA TARJETAS DE CREDITO
- Oficio secretaria Gral
- OFICIO TC Cargo a Cuenta
- PAPEL DE TRABAJO ACE6-OP-14-1
- RESPUESTA 43857 Banco Occidente
- RESPUESTA A OBSERVACIONES (OBSERVACION 14)
- Rpta Banco de Occidente al oficio 40382
- Solicitud de Información a Secteria Gral
- Solicitud de Información Banco Occidente 2019EE0040382
- Solicitud de Información banco occidente2019EE0043857

PRUEBAS RECAUDADAS DENTRO DEL TRAMITE DEL PROCESO:

Mediante Auto No. 042 del 06 de febrero de 2020, Auto de Apertura de Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, se decretó la práctica de las siguientes pruebas:

“A continuación, se señalan cada uno de los medios probatorios a decretar:

- A. Solicitar al Distrito de Buenaventura certificación de la contratación de mínima cuantía para la vigencia 2015 y 2016.*
- B. Realizar un informe técnico contable con el fin de que el despacho cuantifique el valor total de pagos realizados al consumo de las tarjetas de crédito empresarial 4913306564897550 - 5587723056453563 a nombre de José Félix Riascos, que fueron debitados automáticamente de la cuenta No*

030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacifico, para lo cual la Gerencia departamental Colegiada designara un profesional idóneo en las áreas financieras y contables para su realización”.

Mediante SIGEDOC No. 2020EE0015869 del 11 de febrero de 2020, se remitió a la entidad afectada UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA, Comunicación de apertura y solicitud de documentos decretados mediante Auto No.042 del 06 de febrero de 2020. Solicitud consistente *remitir ante este despacho, Certificación de la contratación de mínima cuantía para la vigencia 2015 y 2016.*

A través de SIGEDOC No. 2020ER0021603 del 27 de febrero de 2020, se recibió por parte de la entidad afectada UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA, respuesta al radicado No. 2020EE0015869, en el cual se allegó respuesta y remisión de certificaciones de cuantía de contratación para la vigencia 2015 Acuerdo Superior No. 003 del 2014 y 2016 Acuerdo Superior No. 022 de 2016.

Mediante Oficio con radicado No. 2020IE0030663 del 06 de mayo de 2020, Se solicitó al Gerente Departamental Colegiado Diego Fernando Durango Hernández, la asignación de Profesional en el área financiera o contable con el fin de realizar un informe técnico contable, el cual cuantifique el valor total de pagos realizados al consumo de las tarjetas de crédito empresarial No. 4913306564897550 – 5587723056453563 a nombre de José Félix Riascos, que fueron debitados automáticamente de la cuenta No 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacifico.

A través de Auto No. 310 del 21 de julio de 2020, Notificado mediante estado No. 050-2020 del 29 de julio de 2020, se designó a la Profesional Universitaria de la Contraloría General de la República de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, LUZ YANETH MORENO para desempeñar la laboral de Profesional en contaduría y emitir concepto técnico dentro del Proceso de responsabilidad fiscal No. 2020-00041, cuya entidad afectada es la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.

Con radicado No. 2021IE0004285 del 22 de enero de 2021, La Profesional Universitario LUZ YANETH MORENO OCHOA realizó entrega de Informe Técnico del PRF-2020-00041, informe en el cual se concluyó las siguientes:

VIII. CONCLUSION

➤ Los usos y consumos por las Tarjeta de Créditos 4913306564897550 y 558723056453563, en la vigencia 2015 sumaron \$52.902.311,12, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla No. 004				
Resumen de las Compras y Usos de Tarjetas de Crédito				
Cifras en pesos				
RESUMEN DE LAS COMPRAS Y CARGO REALIZADOS				
POR EL USO DE TARJETAS ASIGNADAS A JOSE FÉLIX RIASCO				
CONCEPTOS	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total	% Participación
VIAJES -TRANSPORTE- DESPLAZAMIENTO	17.350.025,15	1.986.560,00	19.336.585,15	36,55%
HOTELES - ALOJAMIENTO - ALQUILER	1.010.000,00	9.168.750,00	10.178.750,00	19,24%
COMBUSTIBLE - GASTOS VEHÍCULO	525.104,00	3.954.887,00	4.479.991,00	8,47%
ÓPTICA	174.001,00		174.001,00	0,33%
RESTAURANTES- ALIMENTACIÓN	1.096.396,00	5.498.281,00	6.594.677,00	12,47%
OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	913.328,00	10.517.514,00	11.430.842,00	21,61%
GMF 4 X MIL CONSUMOS	84.275,40	124.667,22	208.942,62	0,39%

INTERESES CORRIENTES	116.915,03	379.044,50	495.959,53	0,94%
INTERESES DE MORA	631,70	1.931,12	2.562,82	0,00%
TOTAL	21.270.676,28	31.631.634,84	52.902.311,12	100,00%

Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563– Análisis CGR

El rubro con mayor representatividad corresponde a servicio de viajes transporte y desplazamiento, por los cuales se contrajeron obligaciones por \$19.336.585,15 por viajes aéreos realizados; la equivalencia de estos gastos corresponde al 36,55% del total de las compras.

Por otras compras y servicios se adquirieron obligaciones por \$11.604.843 equivalentes al 21,93%; las compras fueron realizadas en almacenes de cadena en su mayoría. Por servicios de hotelería, alojamiento y alquiler se adquirieron obligaciones por \$10.178.750 que representan el 19,24%; los servicios por este concepto fueron adquiridos en hoteles ubicados en los municipios de Buenaventura, Cali y Guapi.

Los gastos por consumos en restaurantes por \$6.594.677, representan el 12.47% del total de las compras realizadas. El consumo de combustible y gastos de vehículo generaron compromisos por \$4.479.991, representando el 8.47% del del uso de las tarjetas de crédito.

El 1,34% de los consumos que sumaron \$707.464,97, corresponden a los gastos incurridos por el pago de intereses e impuesto al gravamen (4x1000).

➤ La Universidad del Pacífico pagó \$52.619.815,50 por concepto de consumo y cargos de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 558723056453563, otorgada por el Banco de Occidente, seccional Buenaventura, a la Universidad del Pacífico en la vigencia 2015.

Tabla No. 005

Resumen Pagos Totales por TC 4913306564897550 – 5587723056453563

Valores en pesos

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, POR EL USO DETARJETAS DE CREDITOS

ASIGNADAS A JOSE FELIX RIASCO BENAVIDES

FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
29/07/2015	3.470.000		3.470.000
20/11/2015	5.270.000		5.270.000
25/11/2015	8.453.000		8.453.000
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
29/07/2015		700.000,00	700.000
24/09/2015		3.270.000,00	3.270.000
15/10/2015		6.685.531,46	6.685.531
13/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000
5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$ 20.988.000,00	\$31.631.815,50	\$52.619.815,50

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR

En atención a los hechos, valores y fechas de pagos, que fundamentan los hechos del reproche fiscal dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF2020-00041, se concluye que la Universidad del Pacífico durante el periodo diciembre 2015 – enero de 2016, canceló \$13.030.000 por el uso de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 5587723056453563 y sobre los cuales el UNPA, no aportó documentos sobre la legalización de los gastos.

Tabla No. 006

Pagos de las Tarjetas de Créditos dentro del PRF-2020-00038

Valores en pesos

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, DETERMINADOS DENTRO EL PRF 2020-00038

FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000
5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$3.795.000	\$9.235.000	\$13.030.000

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR


- La falta de legalización de los gastos, genera:
- Que los registros de los hechos económicos derivados por el uso de las Tarjetas, no se efectuarán conforme a la normatividad presupuestal, contable y tributaria vigente en el 2015.
 - Incertidumbre relacionada con el propósito de los gastos, toda vez que no se tiene la certeza, si las tarjetas de créditos, fueron utilizadas para el cumplimiento de un propósito u objetivo institucional.

Mediante Auto No. 048 del 02 de febrero de 2021, Auto por medio del cual se pone a disposición el informe técnico No. 2021IE0004285 del 22 de enero de 2021 realizado dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-2020-00041, notificado mediante estado No. 020-2021 del 05 de febrero de 2021, del cual se le corrió traslado a los presuntos FELIX SUAREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, a través de Radicado No. 2021EE0019592 del 13 de febrero de 2021, sin embargo, no se presentó por parte de los presuntos dentro del término legal, objeciones contra el Informe técnico No. 2021IE0004285.

Por medio de Auto No. 539 del 20 de agosto de 2021, Auto mediante el cual se decreta la práctica de pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-2020-00041, notificado mediante estado No. 131-2021 del 24 de agosto de 2021, en su artículo primero se ordenó la práctica de la siguiente prueba:

- “ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR** conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído la práctica de los siguientes medios de prueba:
- Solicitar a la Universidad del pacifico certifique y remita la resolución por medio de la cual el consejo superior autoriza la asignación de gastos de representación al rector por medio de tarjetas de crédito.
 - Solicitar a la Universidad del pacifico la resolución, memorando, circular etc, mediante la cual se regula el uso de estos gastos de representación y que certifique cual es la dependencia encargada de esta función.
 - Solicitar a la Universidad del pacifico certifique y remita el procedimiento establecido para la legalización de dichos gastos de representación.

A través de Oficio No. 2021EE0146807 del 07 de septiembre de 2021, Solicitud de información dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2020-00041 se

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 16 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

solicitó a la entidad afectada UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA, las pruebas decretadas mediante Auto No. 539 del 20 de agosto de 2021.

Mediante SIGEDOC No. 2021ER0126770 del 17 de septiembre de 2021, la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA, allegó ante este despacho respuesta a solicitud No. 2021EE0146807 en la cual allegó los siguientes medios probatorios:

1. Certificación del 08 de septiembre de 2021, en la cual secretario general HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES, certificando que por medio del Consejo Superior no se ha expedido ningún documento que autoriza la asignación de gastos de representación al rector por medio de las tarjetas de crédito durante la vigencia, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020.



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

CERTIFICA:

De acuerdo a los archivos que reposan en la oficina de Secretaria General, me permito informar que por medio del Consejo Superior no se ha expedido ningún documento que autoriza la asignación de gastos de representación al rector por medio de tarjetas de crédito durante la vigencia 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Dado en Buenaventura, a los ocho (08) días del mes de septiembre 2021.



HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES
Secretario General

2. Resolución Rectoral No. 1007 de 28 de octubre de 2016, y certificado expedido por la Secretaria General de la Universidad del Pacifico.
3. Certificación del 13 de septiembre de 2021, emitida por el Directo Administrativo y Financiero de la Universidad del Pacifico, NIKO HERNANDO DURÁN PALACIOS, en la cual indicó que la Universidad del Pacifico, no contaba con un procedimiento para la realización de gastos de representación con las Tarjetas de Crédito Banco de Occidente en las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, precisando, que la Universidad cuenta con el Procedimiento Solicitud y legalización de avances de viáticos, gastos de viaje y apoyo económico.



EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

CERTIFICA QUE:

Con base en la consulta a las diferentes áreas (Secretaría General, Tesorería y Contabilidad) y búsqueda de documentos soportes con miras a dar respuesta concretas a solicitud de información realizada por la Contraloría General de la República; no se evidenció específicamente procedimiento para la realización de gastos de representación con las Tarjetas de Crédito Banco de Occidente vigencias 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Sin embargo, cabe precisar que la Universidad del Pacífico cuenta con el procedimiento Solicitud y legalización de avances de viáticos, gastos de viaje y apoyo económico, en el cual se establecen las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para llevar a cabo la solicitud, el manejo y legalización de los avances por concepto de viáticos, gastos de viaje, capacitación, apoyos económicos y anticipos para adquisición de bienes y servicios que requieran pago de estricto contado se le otorguen a los funcionarios administrativos, académicos, miembros del Consejo Superior, contratistas y estudiantes de la Universidad del Pacífico.

Dada en Buenaventura a los trece (13) días del mes de septiembre del 2021.



NIKO HERNANDO DURÁN PALACIOS

Mediante Auto No. 008 del 18 de enero de 2023, Auto por medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro del PRF-2020-0041, notificado mediante estado No. 010-2023 del 24 de enero de 2023, Auto en el cual en su artículo primero se ordenó la práctica de la siguiente prueba:

“ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la práctica oficiosa de las siguientes pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos investigados:

- 1. REQUERIRLE al MINISTERIO DE EDUCACIÓN** la resolución o resoluciones del señor FELIX SUAREZ REYES quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 16.485.434 resoluciones donde ha sido reconocido como RECTOR de la entidad afectada UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA.
- 2. REQUERIRLE a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA** se sirva certificar y aportar, mediante que acto administrativo se autorizó el pago de los rubros de las tarjetas de crédito Nos. 4913306564897550 y 5587723056453563 mediante debitación automática.

A través de SIGEDOC No. 2023EE0012000 del 30 de enero de 2024, se solicitó a la entidad Ministerio de Educación – Men, Resolución mediante la cual el Ministerio reconoció como rector de la Universidad del Pacífico al señor Félix Suarez Reyes visible en el archivo denominado “20230130 2023ee0012000 oficio de

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 18 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

requerimiento de informacion de auto no 008 del prf-2020-00041.pdfEn cumplimiento al Auto No. 008 del 18 de enero de 2023.

Mediante SIGEDOC No. 2024EE0183882 del 21 de septiembre de 2024, se solicitó a la entidad afectada Universidad del Pacifico – UNPA, certificar y aportar mediante que acto administrativo se autorizó el pago de los rubros de las tarjetas de crédito Nos. 4913306564897550 y 5587723056453563 mediante debitación automática. En cumplimiento al Auto No. 008 del 18 de enero de 2023.

A través de Radicado No. 2023ER0031871 del 01 de marzo de 2023, se recibió respuesta por parte de la entidad Ministerio de Educación, el cual allegó los siguientes medios probatorios:


- Certificado de existencia y representación legal de instituciones de educación superior – histórico, archivo denominado “*ERL-23-000200__1_pdf_2023-EE-046440*”.
- Respuesta comunicación 2023-ER-067363 archivo denominado “*2023-EE-046440-Comunicacion_Enviada-9745898pdf_2023-EE-046440*”.
- Inscripción Rector y/o Representante Legal archivo denominado “*INS-2017-00133-IR_-_Oficio-VM-VM-VM-626529__1_pdf_2023-EE-04644*”.
- Acta de posesión No. 001 de 2017 Rector Universidad del Pacifico, archivo denominado “*Resolucion_01_del_24_Abril_2017__1_.pdf_2023-EE-046440*”

Mediante Auto No. 113 del 28 de febrero de 2024, Auto mediante el cual se decreta y se niega la práctica de pruebas dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2020-00041, notifiacdad mediante estado No. 037-2024 del 01 de marzo de 2024, Auto en el cual se decidió sobre la práctica de las siguientes pruebas:

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído la práctica de los siguientes medios de prueba: - Solicitar a la compañía LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, allegar certificado de disponibilidad presupuestal de la póliza N°3000075. Por lo cual este Despacho ordena la práctica de esta.

ARTICULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de practica de pruebas TESTIMONIAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS realizada por la presunta FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, de conformidad a la parte motiva del presente auto.

ARTICULO TERCERO: INCORPORAR al expediente y tener como pruebas los soportes remitidos con el escrito de argumentos de defensa de LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, a través de su apoderado de confianza el Abogado GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA asignándoles el valor que en derecho corresponda.

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 19 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

A través de radicado No. 2024EE0085476 del 08 de mayo de 2024 se solicitó a la compañía LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, requerimiento de documentación en cumplimiento al Auto No. 113 del 28 de febrero de 2024.

Con radicado No. 2024ER0098217 del 10 de mayo de 2024, la compañía LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS allegó respuesta a la solicitud No. 2024EE0085476, Respuesta en la cual aportó las siguientes pruebas documentales:

- Póliza No. 3000075 con vigencia desde el 14-07-2015 hasta el 14-07-2016 archivo denominado “2_39_65162_3000075”.
- Constancia de disponibilidad presupuestal de la póliza, en la cual se observa una disponibilidad de \$2.500.000 de valor asegurado. Archivo *denominado* “CD 26149-OK”

ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LOS VINCULADOS

En cumplimiento del artículo 50 de la ley 610 de 200, se le dio traslado del Auto No. 184 del 21 de marzo de 2023, de Imputación de Responsabilidad Fiscal a los Presuntos responsables fiscales vinculados al presente Proceso, así como a las Aseguradoras vinculadas en calidad de terceros civilmente responsables, quienes presentaron los siguientes escritos:


- El señor **FELIX SUAREZ REYES**, notificado personalmente de manera electrónica el 18/05/2023, visible en el archivo denominado “2023IE0064400 DEVOLUCION DILIGENCIAS PRF 2020-00041”, sin embargo, dentro del presente proceso no se observa como tampoco se recibió por parte del presunto Argumentos de defensa contra el Auto No. 184 del 21 de marzo de 2023, auto de imputación de responsabilidad fiscal.

Una vez surtida la debida notificación del auto de imputación del señor SUAREZ REYES, se tiene por parte de este Despacho que no presento argumentos de defensa de la imputación.

- El señor **ENVER MOSQUERA HURTADO**, notificado personalmente de manera electrónica el 06/06/2023, visible en el archivo denominado “2023IE0064400 DEVOLUCION DILIGENCIAS PRF 2020-00041”, sin embargo, dentro del presente proceso no se observa como tampoco se recibió por parte del presunto Argumentos de defensa contra el Auto No. 184 del 21 de marzo de 2023, auto de imputación de responsabilidad fiscal.

Una vez surtida la debida notificación del auto de imputación del señor SUAREZ REYES, se tiene por parte de este Despacho que no presento argumentos de defensa de la imputación.

- La señora **FLOR ANLLEYLY RUIZ GARCIA** notificación personal el 10 de noviembre de 2023, visible en el archivo denominado “2023IE0120132 DEVOLUCION DE DILIGENCIAS AUTO DE IMPUTACION NO 184 DEL 21032023 PRF-2020-00041”, presentó argumentos de defensa y solicitud de


 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 20 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

nulidad a través de SIGEDOC No. 2023ER0226182 del 27 de noviembre de 2023, en el cual expuso los siguientes argumentos:

“DESCARGOS:

Es de tener en cuenta que las tarjetas de créditos relacionadas en los auto 042 del 6 de febrero de 2020, se dio apertura del PRF-2020-00041, Auto proyectado la Profesional Universitaria Mónica Fernanda Gómez y aprobado por el Directivo Ponente Diego Fernando Durango Hernández, y el AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-0004, AUTO No. 184, de fecha 21 DE MARZO DE 2023, en el cual se me indilgan responsabilidades, eran de uso exclusivo del rector del momento, para lo referente a los gastos de representación de la Universidad en los eventos a los cuales asistirá a cumplir sus funciones como rector y representante legal de la Instituciones.

Dichas tarjetas nunca estuvieron bajo la custodia de la tesorería, estas se entregaban directamente entre los rectores en el periodo respectivo, sin tener control sobre las mismas la tesorería de la Universidad (el trámite ante el banco no estaba a cargo de la oficina de tesorería), dichas tarjetas se debitaban automáticamente de la respectiva cuenta bancaria razón por la cual no se podía autorizar previamente el gasto por el órgano competente, reproche fiscal que se fundamenta en que dichos pagos generaron un presunto detrimento patrimonial a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO UNPA, desde donde se puede observar la falta de responsabilidad e imposibilidad de control de la tesorera, la expedición del CDP y RP, no corresponde a las funciones la tesorería, la obligación está en cabeza de la rectoría quien profería el acto administrativo y lo tramitaba ante la dirección administrativa y financiera y la oficina de presupuesto, que debía de expedir el CDP y el RP., reitero que no era mi responsabilidad realizar el control en el manejo de los recursos que se utilizaban a través de dichas tarjetas: En la oficina de tesorería se efectúan los pagos así: 1) previamente autorizados y verificados por la dirección financiera, 2) revisados, verificados y causados por contabilidad con los respectivos soportes, lo que no pasaba con las tarjetas dado que los gastos que ella generaba se debitan automáticamente de las cuentas a las cuales estaban asociada. La oficina de tesorería no es la responsable de solicitar o autorizar los CDP y RP para generar el respectivo gasto causado por otra dependencia. Adicionalmente, los cambios inesperados de rectores (tres), en menos de un año complejizan la labor general de la Universidad, en el año 2015 se posesiono como rector encargado el rector José Félix Riascos Benavides, productor de las medidas preventivas impuestas por el ministerio de educación a la institución, posteriormente después del proceso electoral ingreso el rector Hugo Arley Tocar, quien estuvo hasta el 23 de diciembre de 2015 en cumplimiento de fallo judicial que le permito el ingreso como rector de la institución al señor Félix Suarez Reyes hasta el 23 de febrero del año 2016, seguidamente ingreso nuevamente el señor rector Hugo Arley Tobar, quien estuvo hasta el mes de octubre de 2016 y fue destituido producto de un fallo judicial del consejo de estado, que invalido el proceso electoral por el cual había sido elegido como rector. Por lo anterior el Consejo Superior eligió como rector encargado al señor Víctor Hugo Moreno, quien estuvo en este cargo desde octubre de 2016 hasta febrero de 2017 donde volvió nuevamente el señor Félix Suarez Reyes, a ocupar la rectoría hasta finales del año 2018 cuando fue removido del cargo por el Consejo Superior de la Universidad, este mismo órgano posesiono al señor Oscar Larrahondo como rector encargado

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 21 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

quien estuvo febrero de 2019 y fue removido por el Consejo Superior para encargar un nuevo rector desde febrero de 2019 a la fecha.

Con esto se evidencia los traumatismos institucionales generales por los cambios inesperados de rectores y en especial para el desarrollo del trabajo diario y de las labores de la oficina de tesorería; no es la tesorería la encargada como ya lo manifesté anteriormente, de legalizar el pago de las tarjetas, esta labor corresponde al generador seguido del área financiera y a presupuesto, quienes deben de autorizar los gastos, CDP y RP, el rector una vez ejecute el gasto debe de legalizar el mismo. La responsabilidad Fiscal, en los casos en estudio no recae en la tesorería, como se puede ver en el caso de la legalización realizada por la Doctora Lucy Mar Bolaños, del Doctor José Feliz Riascos, comprobante de egreso de vigencia 2015, número 22251 del 24/11/2016, la causación de pago que realiza la dependencia de contabilidad 2015 número 5312 del 23/11/2015, con el correspondiente registro presupuesta que elabora la oficina de presupuesto 2337 de la vigencia 2015, de fecha 18/11/2016, profiriéndose la correspondiente resolución por rectoría, al ser un hecho cumplido, con el de legalizar el gasto (Resolución No. 968/2015).

Situación que no ocurre cuando el gasto (compra) con tarjeta se realiza previa solicitud realizada por la dependencia o funcionario que lo requiere, para lo cual se realiza el trámite por medio de formato de disponibilidad presupuesta, caso fortalecimiento académico del claustro docente, código AP-GAFOO1, R.1025 noviembre 24, el cual se anexa en la versión. Refiere la presunto que no se puede desconocer que quien autorizo la adquisición de las tarjetas fue el consejo superior de la Universidad como órgano competente de la misma, frente a quienes recae la responsabilidad de la forma en que se autorizó el uso de esta, como lo indique anteriormente, el manejo de las tarjetas de crédito, estaban en cabeza del rector (para el caso, los distintos rectores que existieron durante el periodo investigado), las cuales se encontraban en el rubro de GASTOS DE REPRESENTACION, con los cuales se cubrían por parte del rector de turno, gastos tales como: alojamiento, alimentación, transporte, en general los que se requieran para ejercer su condición de representante de la Universidad en los distintos actos en que se requería su presencia, actividades en las cuales desde mi cargo como tesorera no tenía control previo o posterior, siendo este mi superior jerárquico, pues no estaba dentro de mis funciones el control o autorización de dichos gastos, lo que si recaía en cabeza de otras dependencias que debían solicitar y proferir CDP y el RP, que debían conciliar y/o autorizar los desembolsos, su despacho no puede perder de vista que la persona que utilizaba las tarjetas es el señor rector, quien es el ordenador del gasto, quien solo puede ser controlado por el órgano superior que para el caso de la Universidad del Pacífico, es el Consejo Superior, tal lo definen los mismo estatutos de la Universidad, quien como ya lo indique aprobó la solicitud al banco de las tarjetas y el uso de las mismas".

En la oficina de tesorería se efectúan los pagos así: 1) previamente autorizados y verificados por la dirección financiera, 2) revisados, verificados y causados por contabilidad con los respectivos soportes, lo que no pasaba con las tarjetas dado que los gasto que ella generaban se debitan automáticamente de las cuentas a las cuales estaban asociada.

La oficina de tesorería no es la responsable de solicitar o autorizar los CDP y RP para generar el respectivo gasto causado por otra dependencia.

Adicionalmente, los cambios inesperados de rectores no solo de tres, en menos de un año complejizan el desarrollo del trabajo diario y de las labores de la oficina de tesorería; no es la tesorería la encargada como ya lo manifesté anteriormente, de legalizar el pago de las tarjetas, esta labor corresponde al financiero y a presupuesto, quienes deben de autorizar los gastos, los CDP y RP, el rector una vez ejecute el gasto debe de legalizar el mismo.

La responsabilidad fiscal, en los casos en estudio no recae en la tesorería, como se puede ver en el caso de la legalización realizada por la Doctora Lucy Mar Bolaños, del Doctor José Félix Riascos, comprobante de egreso de vigencia 2015, número 22251 del 24-11-2016, la causación de pago que realiza la dependencia de contabilidad, 2015 número 5312 del 23-11-2015, con el correspondiente registro presupuesta que elabora la oficina de presupuesto 2337 de la vigencia 2015, de fecha 18-11.2015, profiriéndose la correspondiente resolución por rectoría, al ser un hecho cumplido, con el fin de legalizar el gasto (resolución No. 968-2015.

Comprobante de Egreso

CÓDIGO

PÁGINA

1 de 1

Vigencia
2015

Ver Comprobante De Egreso
Tipo Documento Contable
COMPROBANTES DE EGRESO

Número
22254

Fecha
24-11-2015

Concepto
PAGOS DEUDAS ADQUIRIDAS POR LA EMPRESA
Pagado en
CHEQUE

Banco
BANCO DE OCCIDENTE

Sucursal
BANCO DE OCCIDENTE - BUENAVENTURA

Cuenta Bancaria
000235001

Número de Cheque
930846

Chequera
550-1-4

Identificación
890300279

Beneficiario

Nombre o Razón Social
BANCO DE OCCIDENTE

Pagado a
BANCO DE OCCIDENTE
Origen del Egreso
CAUSACIÓN PAGO
Cuentas por Pagar

Número	Fecha	Subtotal	Valor Impuesto	Total	Neto Causado	Total Pagado	Saldo	Valor a Pagar
5312	23-11-2015	5,870,642.02	0.00	5,870,642.02	5,870,642.02	5,870,642.02	0.00	5,870,642.02


Comprobante Registro

Tipo	Número	Concepto	Fecha	Valor	Neto a Pagar
REGISTRO PRESUPUESTAL	2337	SOLICITUD PARA CANCELACION DE TARJETA DE CREDITO 18-11-2015 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		5,870,642.02	5,870,642.02

Rubro	Unidad	Rubro	Centro de Costo	Fuente de Financiación	Disponible PAC	Saldo Disponible	Total a Pagar	
21020101 - MATERIALES Y SUMINISTROS		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		RECURSOS DEL BALANCE	16,616,766.65	0.00	5870642.02	
					Total	16,616,766.65	0.00	5870642.02

Concepto	Centro de Costo	Concepto de Egreso		Subtotal		Impuesto		Total a Pagar	
		Causado	Egresado	Saldo	Valor Pagar	Causado	Egresado	Saldo	Valor Pagar
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,870,642.02	5,870,642.02	0.00	5,870,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		5,870,642.02	5,870,642.02	0.00	5,870,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		5,870,642.02	0.00	5,870,642.02	5,870,642.02	5,870,642.02	0.00	0.00	5,870,642.02

Grupo Impuesto	Tipo Impuesto	Porcentaje Base	Base Aplicación	Signo	Desembolso	Valor
No se encontraron registros.						
Neto a Pagar 5,870,642.02						



CAUSACIÓN DE PAGO

Fecha del reporte: 23-11-2015

Contabilidad - Academusoft 9.2

Nombre de la Empresa:
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

NIT:
835500300

Vigencia:
2015

Numero:
5312

Causación de Pago:
Tipo Documento Contable:
OTROS ACREEDORES-
Fecha:
23-11-2015

Concepto:
SOLICITUD PARA CANCELACION DE TARJETA DE CREDITO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

Beneficiario:
Nombre:
BANCO DE OCCIDENTE

Identificación:
890300279

Comprobante Registro:
Concepto:
Fecha:
18-11-2015

Valor:
5.870.842.02

Tipo:
REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero:
2337

Concepto:
SOLICITUD PARA CANCELACION DE TARJETA DE CREDITO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

Detalle del Registro:
Escriba Registro Presupuestal:
OTRO:
Otro:

Tipo Documento:
RESOLUCION

Numero:
366-2015

Fecha:
18-11-2015

SubTotal:
5.870.842.02

Valor Impuesto:
0.00

Total:
5.870.842.02

Disponible:
0.00

Valor:
5.870.842.02

Tipo Documento Soporte:
RESOLUCION

Numero:
969-2015

Fecha:
18-11-2015

Subtotal:
5.870.842.02

Valor Impuesto:
0.00

Total:
5.870.842.02

Valor Total:
5.870.842.02

COP:
1197

Rubro:
21020101

Detalle:
Descripción:
MATERIALES Y SUMINISTROS

Saldo Disponible:
0.00

Valor:
5.870.842.02

Concepto Egreso:
MATERIALES Y SUMINISTROS

Concepto Egreso:
Centro de Costo:
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Oferido:
NO

Subtotal:
5.870.842.02

Valor Impuesto:
0.00

Total:
5.870.842.02

Grupo Descuento:
Subtotal:
5.870.842.02

Total Impuesto:
0.00

Valor Total:
5.870.842.02

Total Causado:
5.870.842.02

Total Descuentos:
0.00

Neto a Pagar:
5.870.842.02

Impuestos, Retenciones y Descuentos:
Tipo descuento:
No se encontraron registros

Base:
Total Descuentos:
0.00

% Base:
Total Descuentos:
0.00

Signo:
Total Descuentos:
0.00

Valor:
Total Descuentos:
0.00

Elaborado Por: EMERSON ANGULO OLIVE

SPWH

Juan Pardo

24-11-2015

12:30 w

		REGISTRO PRESUPUESTAL		Código	
				Página	1 de 1
Nombre de la Entidad			NIT		
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO			835000300		
Ver Registro Presupuestal					
Número	Vigencia		Fecha		
2337	2015		18-11-2015		
Concepto					
SOLICITUD PARA CANCELACION DE TARJETA DE CREDITO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO					
Beneficiario					
Identificación			Nombre		
890300279			BANCO DE OCCIDENTE		
Rubros CDP					
CDP	Rubro		Valor		
1197	21020101 - MATERIALES Y SUMINISTROS		5.870.642,02		
Total Registro Presupuestal:					5.870.642,02
Elaborado Por: Hyldeir Eladio Landrau Obregon			 DIRECTOR		

RESOLUCION No. 968-2015
(Por medio de la cual se reconoce y autoriza un pago)

El Rector (E) de la Universidad del Pacífico en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas en el Estatuto General de la Institución y,

CONSIDERANDO

- Que para el desarrollo de actividades de la Universidad se requirieron algunos servicios de apoyo logístico como servicio de comedor y atención durante las reuniones del Consejo Superior y otras reuniones direccionadas por la rectoría.
- Que estos gastos se efectuaron con la de la Tarjeta de Crédito Visa N°558772-*-*-*3-563 de la Universidad del Pacífico asignada al a Dr. José Félix Riascos Benavides – Rector (E), de acuerdo al extracto con fecha de corte del 31 de octubre de 2015.
- Que de acuerdo con los anteriores considerandos, y con base en el extracto bancario, el Rector (E) de la Universidad del Pacífico,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar pagar el valor del Extracto Credencial Visa del Banco de Occidente correspondiente al pago de la Tarjeta de Crédito por valor CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS M/L (\$5.870.642,02), para sufragar los gastos de apoyo logístico durante las sesiones del Consejo Superior y otras reuniones direccionadas por la rectoría.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Buenaventura, 17 de noviembre de 2015

CÚMPLASE



GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.

COMPROBANTE DE EGRESOS	
NIT: 835.000.300-4	Código: AP-GA-FQ17 Página 1 de 1


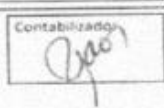
COMPROBANTE DE EGRESO No. UP145-20150206		Fecha 06/02/2015
---	--	---------------------

C.C / NIT: 890300279-4	Beneficiario BANCO DE OCCIDENTE
---------------------------	------------------------------------

CÓDIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
240101	BIENES Y SERVICIOS	PAGO SERVICIOS ADQUIRIDOS CON LA TARJETA DE CREDITO, PARA SUPERAR LOS GASTOS DE APOYO LOGISTICO DURANTE LAS SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR, EXTRACTO CON FECHA DE CORTE 30 DE NOV-14, RESOLUCION NO. 771-2014, REG. 1476, CDP 767, OBL. 2112, CDO. 2012-10	\$ 1.238.078
TOTAL			\$ 1.238.078

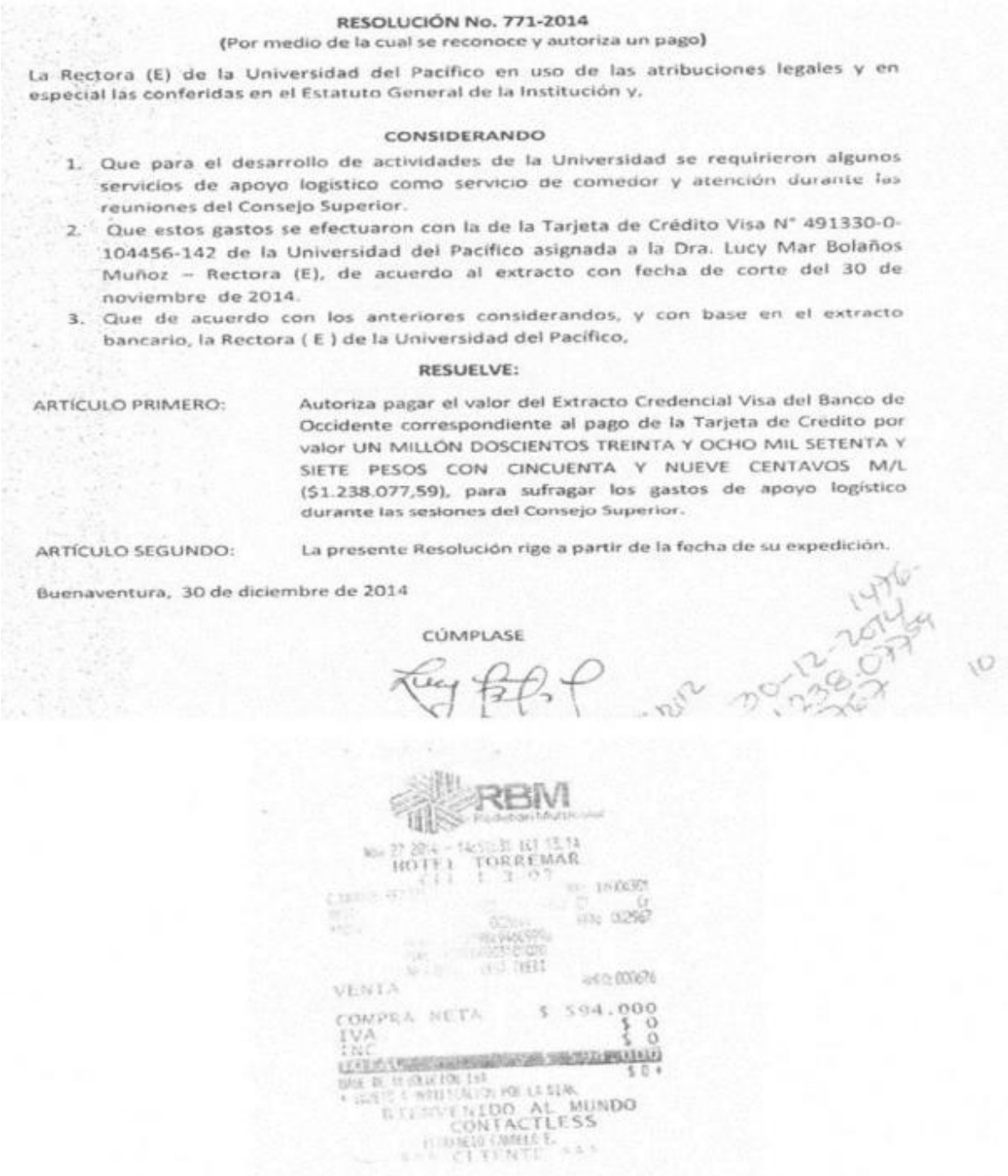
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L
------------------	---

Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Firma y Sello del Beneficiario
Cuenta	030-23550-1	
Cheque	ASONO A CUENTAS	

Realizado por: ANACELLY S.	Aprobado por: 	Contabilizado: 	C.C / NIT:
-------------------------------	---	--	------------

CAUSACIÓN DE PAGO									
Fecha del reporte: 06-01-2015 Nombre de la Entidad: UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO NIT: 830000300 Contabilidad: Académica 3.2									
Urgencia: 2014	Número: 3013	Causación de Pago: Tipo Documento Contable: BIENES Y SERVICIOS		Fecha: 30-12-2014					
Concepto: PAGO DE TARJETA DE CREDITO MES DE NOVIEMBRE		Beneficiario: BANCO DE OCCIDENTE							
Identificación: 890300279	Número: 2115	Comprobante Registro: PAGO DE TARJETA DE CREDITO MES DE NOVIEMBRE	Fecha: 30-12-2014	Valor: 1.238.077,59					
Tipo: REGISTRO PRESUPUESTAL		Detalle del Registro: Soporte Registro Presupuestal: OTRO							
Tipo Documento: RESOLUCION		Número: 771-2014	Fecha: 30-12-2014	SubTotal: 1.238.077,59	Valor Imputado: 0,00	Total: 1.238.077,59	Disponibles: 0,00	Valor: 1.238.077,59	
Tipo Documento Soporte: RESOLUCION		Número: 771-2014	Fecha: 30-12-2014	Subtotal: 1.181.125,59	Valor Imputado: 56.952,00	Valor Total: 1.238.077,59		1.238.077,59	
COP: 1119		Rutro: 21020101	Detalle: Descripción: MATERIALES Y SUMINISTROS		Saldo Disponible: 0,00		Valor: 1.238.077,59		
Concepto Egreso: ASEO Y CAPTERIA		Centro de Costo: RECTORIA		Ofendido: ND	Subtotal: 1.181.125,59	Valor Imputado: 56.952,00	Total: 1.238.077,59		
Grupo Descuento:		Impuestos, Retenciones y Descuentos: Tipo documento: No se encontraron registros		Base: Total Descuentos: 0,00	% Base: Total a Pagar: 1.238.077,59	Signo: Valor: 1.238.077,59			
Subtotal: 1.181.125,59		Total Imputado: 56.952,00		Valor Total: 1.238.077,59		Total Causado: 1.238.077,59		Total Descuentos: 0,00	

Elaborado Por: LUISA VERTES PALLONERO		Verificado Administrativo y Financiero:	
---------------------------------------	--	---	--



Como lo indique anteriormente, esta situación no ocurre cuando el gasto (compra) con tarjeta se realiza previa solicitud realizada por la dependencia o funcionario que lo requiere, para lo cual se realiza el trámite por medio de formato de disponibilidad presupuesta, caso fortalecimiento académico del claustro docente, código AP-GA-FOO1, R.1025 noviembre 24, el cual se anexa imagen:



FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Código: AP-GA-F001

Adrobado: 29/09/2014

Versión: 02

Página: 5 de 10

Como lo indica la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal, es claro que no soy la responsable del posible daño patrimonial que se puede haber causado a la Universidad del Pacifico, como lo demostré en el presente escrito de versión libre, afirmación que se ratifica en las consideraciones del despacho:

Frente a este tema, el Honorable Concejo de Estado Sección primera, Sentencia del 16 de marzo de 2016. M.P. María Elizabeth García González. Rad. No. 68001- 23-000-2010-00706-01, el cual preciso:

"El proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa (...) En efecto, en la investigación se va a establecer la certeza de los hechos investigados, la incidencia de éstos en la gestión fiscal y a qué personas en concreto se les puede imputar la responsabilidad por las irregularidades"

En el presente proceso, no existe el elemento de responsabilidad fiscal que me involucre en el presunto daño fiscal a la Universidad del Pacifico, un elemento tan siquiera subjetivo que permita intuir o tener un indicio que yo con mi actuación como gestor fiscal, haya actuado al menos con culpa grave, o un elemento de relación de causalidad que acredite que el daño sea consecuencia de mi actuar como gestor fiscal, tal lo ha definido la Sección Quinta Descongestión; Sentencia proferida el 1 de marzo de 2018, Expediente 76001- 23-31-000-2007-00152-01: CP: Alberto Yepes Barreiro.

"ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL i) Un elemento objetivo consistente en que exista prueba que acredite con certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público, y, de otro, su cuantificación. (...) (ii) Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquel haya actuado al menos con culpa grave. (...) (iii) Un elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal. Como se explicó, estos elementos deben materializarse de manera concomitante en el procedimiento de responsabilidad fiscal, pues si alguno de ellos no está acreditado, la consecuencia inevitable será que no puede expedirse una decisión declaratoria de responsabilidad."

Era y es imposible desde mi cargo como tesorera, hacer un control fiscal del gasto que realiza el funcionario ordenador del gasto, en función de su activada como rector de la misma, como funcionario competente del gasto, no se puede, como lo han definido las altas cortes, lo imposible no puede ser tenido en cuenta jurídicamente.

- a) *"Las obligaciones jurídicas tienen un fundamento en la realidad, ya que operan sobre un plano real; de ahí que realizan siempre una acción o conservan una situación, según sea una obligación de dar o hacer en el primer caso o de no hacer en el segundo-. Ese es el sentimiento de operatividad real de lo jurídico. Lo imposible, jurídicamente no existe; y lo que no existe no es objeto de ninguna obligación; por tanto, la obligación a lo imposible no existe por ausencia de objeto jurídico.*
- b) *Toda obligación debe estar proporcionada al sujeto de la misma, es decir, debe estar de acuerdo con sus capacidades; como lo imposible rebasa la capacidad del sujeto de la obligación, es desproporcionado asignarle a aquél una vinculación con un resultado exorbitante a su capacidad de compromiso, por cuanto implicaría comprometerse a ir en contra de su naturaleza, lo cual resulta a todas luces un absurdo.*
- c) *El fin de toda obligación es construir o conservar-según el caso el orden social justo. Todo orden social justo se basa en lo existente o en la probabilidad de existencia. Y como lo imposible jurídicamente resulta inexistente, es lógico que no haga parte del fin de la obligación; y lo que no está en el fin no mueve al medio. Por tanto, nadie puede sentirse motivado a cumplir algo ajeno en absoluto a su fin natural.*
- d) *Toda obligación jurídica es razonable. Ahora bien, todo lo razonable es real o realizable. Como lo imposible no es real ni realizable, es irracional, lo cual riñe con la esencia misma de la obligación".*

*Señores contraloría, es Imposibilidad de estructurar la imputación fáctica entre la conducta del FLOR ANLLEY RUIZ GARCIA y el daño.
Dentro de los requisitos que de tiempo atrás la ley, la doctrina y la jurisprudencia han determinado para que surja la responsabilidad fiscal está el denominado nexo causal.*

Esto no es otra cosa que la relación o vínculo que debe existir entre la conducta dolosa o gravemente culposa y el daño. En este orden de ideas, si no hay nexo causal, no surge responsabilidad alguna y, por ello, en el caso que nos ocupa no puede condenarse a FLOR ANLLEY RUIZ GARCIA, cuando su conducta nada tuvo que ver con el resultado que causó el daño, al menos, no hay prueba

de ello, pues dentro de sus facultades laborales, no se encontraba el control y/o manejo de las tarjetas, el rector hizo uso de las facultades que se le brindaban.

Debe recordarse que para probar la existencia del nexo causal es necesario que la causa real, fáctica, sea aquella determinante en el acaecimiento del hecho, lo cual no se acredita en el caso sub judice por cuanto no puede reputarse que la conducta de FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA fue el evento desencadenante del daño, cuando la causa eficiente fue el hecho propio del "Consejo Superior" (de la Universidad del Pacífico), pues las facultades y la aprobación de los montos máximos que el rector de la institución puede gastar por gastos de representación son estipulados y aprobados de antemano por dicho Consejo y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, realizó las compras de tiquetes aéreos, hotelería, alimentación en aras de actuar en beneficio de la Universidad del Pacífico, por lo tanto no da a lugar el nexo causal alegado. La jurisprudencia ha avalado esta posición dentro de sus pronunciamientos:

(...) la jurisprudencia nacional ha utilizado como método para identificar la 'causa' del daño, la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, sólo es causa del resultado, aquella que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo (...). Así lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 22 de junio de 2001, con ponencia del Consejero Doctor, Ricardo Hoyos Duque: '(...) es claro que sólo alguna o algunas de las causas que intervienen en la realización del daño son jurídicamente relevantes. Para establecer cuál es la determinante en la producción del daño se han ideado varias teorías y aunque su validez no es absoluta pues con ninguna de éstas puede obtenerse la solución de todos los casos concretos, sí constituyen ayudas metodológicas importantes. La teoría de la causalidad adecuada es la de mayor acogida en la jurisprudencia, (...). Según esta teoría, sólo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante (...)2 (destacado fuera del texto original).

En esta misma línea, el Consejo de Estado se ha pronunciado así:

La equivalencia de condiciones fue sustituida en la jurisprudencia de esta Corporación por la teoría de la causa adecuada, de acuerdo con la cual "de todos los hechos que anteceden la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata". Esta teoría fue acuñada e implementada, por el rechazo a la equivalencia de condiciones, "[...] pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito". Así pues, en aras de una racionalización, el juicio de responsabilidad se enfocó en lo que cabría esperar normalmente, bajo la premisa de que un sujeto sólo está obligado a resarcir un perjuicio, cuando este sea razonablemente esperado y previsible para un observador objetivo.

Para el caso sub judice sería erróneo considerar la supuesta conducta cometida por mi como la causa eficiente del daño que hoy se busca reparar, puesto que como se vio en el argumento anterior, mi conducta iba de acuerdo a las facultades que se le brindaba en su posición y el uso de ellas iba encaminada directamente al cumplimiento de sus funciones y no a la representación de la Institución, como si es la del rector, es decir actuó de acuerdo a lo que el "Consejo Superior" de la institución había aprobado con

anterioridad. La inexistencia de este elemento se refuerza con los siguientes argumentos que pasan a verse a continuación.

Hecho exclusivo del "Consejo Superior" - Falta de legalización de los gastos correspondientes a representación

El material probatorio allegado al proceso es expletivo en señalar como la principal causa eficiente y certera del daño es la compra que se realizó con las 2 tarjetas de crédito una visa No 491330-4007376-688 y otra mastercard No. 558772-5619832-902 del Banco de Occidente, reflejado en que esos eran recursos destinados específicamente para la educación y que los consumos se hicieron a nombre de Hugo Arley Tovar Otero.

En efecto, las compras si se dieron por el señor Hugo Arley Tovar Otero, pero bajo circunstancias acordes a las facultades que se le otorgaron, pues los gastos por concepto de viajes y transporte fueron del (81.6%), alimentación (5.2), hoteleria, alojamiento y alquiler (4.7%), otras compras (4.3%), combustibles y gasto vehículos (2.5) y por impuestos e intereses (2.0%) y fue el "Consejo Superior" de la institución educativa quien no realizó la legalización de los anteriores gastos correspondientes a los gastos de representación en pro de la Universidad del Pacífico, situación ante la cual no obstante no actuó diligentemente:


Las circunstancias que frenaron la legalización del gasto hecho en representación, es que se les facultaba a los rectores el uso de dichas tarjetas de crédito, pero no se había estandarizado las condiciones:

No obstante, en la Versión Libre del informe escrito dado por ENVER MOSQUERA HURTADO, manifiesta lo reiterado en el presente y es que los gastos de representación consistían en alojamiento, alimentación, transporte, entre otros y que dichos gastos se autorizaban y se controlaban por el órgano superior al Rector, en este caso es el "Consejo Superior":

Refiere la presunto que no se puede desconocer que quien autorizo la adquisición de las tarjetas fue el consejo superior de la Universidad como órgano competente de la misma, frente a quienes recae la responsabilidad de la forma en que se autorizó el uso de esta, como lo indique anteriormente, el manejo de las tarjetas de crédito, estaban en cabeza del rector (para el caso, los distintos rectores que existieron durante el periodo investigado), las cuales se encontraban en el rubro de GASTOS DE REPRESENTACION, con los cuales se cubrían por parte del rector de turno, gastos tales como: alojamiento, alimentación, transporte, en general los que se requieran para ejercer su condición de representante de la Universidad en los distintos actos en que se requería su presencia, actividades en las cuales desde mi cargo como tesorera no tenía control previo o posterior, siendo este mi superior jerárquico, pues no estaba dentro de mis funciones el control o autorización de dichos gastos, lo que si recaía en cabeza de otras dependencias que debían solicitar y proferir CDP y el RP, que debían conciliar y/o autorizar los desembolsos, su despacho no puede perder de vista que la persona que utilizaba las tarjetas es el señor rector, quien es el ordenador del gasto, quien solo puede ser controlado por el órgano superior que para el caso de la Universidad del Pacífico, es el Consejo Superior, tal lo definen los mismo estatutos de la Universidad, quien como ya lo indique aprobó la solicitud al bando de las tarjetas y el uso de las mismas.

Siendo enfática además en que era una atribución que se le permitía al rector de la institución, con previa autorización del Consejo Superior.

En relación con lo anterior y teniendo claro el contexto en el que se dieron los gastos hechos por quien en la época que sucedieron los hechos actuaba como Rector en propiedad de la Universidad del Pacífico, Hugo Arley Tovar Otero,

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 31 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	


se puede concluir que la falta de estandarización del proceso, no significa la inexistencia de la autorización de hacer gastos por representación realizando las compras de lo necesario con las tarjetas de crédito que en aquel momento se daban a disposición del rector.

En suma, en el presente caso no se me puede imputar responsabilidad por cuenta de que i) mi conducta no es subsumible bajo la categoría de dolosa o gravemente culposa, puesto que se evidencia en el material probatorio que los gastos no fueron otros que los correspondientes a alimentación, transporte, alojamiento y tiquetes aéreos; ii) existe imposibilidad de estructurar la imputación fáctica y jurídica habida cuenta de que no existe nexo causal entre su conducta y el daño ocasionado a la Administración, puesto que iii) se presenta una causal exonerativas de responsabilidad, que como lo ha dejado ver la jurisprudencia, tienen el efecto de romper la relación de causalidad, a saber: a) hecho exclusivo del Consejo Superior, por la falta de legalización del proceso de realzar los gastos de representación, al no haberle mencionado al rector que posterior al actuar dentro de sus facultades, debía remitir dichas cuentas y gastos al Consejo Superior, para que este los legalizara.

Todas las circunstancias mencionadas llevan a concluir que no se puede imputar responsabilidad fiscal a Flor Angelly Ruiz, puesto que no se configuran los elementos propios de la responsabilidad civil. Una eventual condena a mí, implicaría socavar con el principio de gran renombre según el cual "nadie está obligado a lo imposible", en cuanto la inexistencia de un proceso de legalización de los gastos que por parte del Consejo Superior de la Institución, que eran quienes concedían y facilitaban el uso de las tarjetas de crédito a los rectores de la Universidad del Pacífico y por lo tanto, esto se da tras causa ajenas, externas a la voluntad y posibilidad de acción del tanto del rector del momento como de Flor Angelly Ruiz.

Es de tener en cuenta que la contraloría a través de la Gerencia Departamental Colegiada, se adelantaron los Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal Nos PRF-2020-00038, CUN SIREF AC-80763-2020-28841, ENTIDAD ESTATAL AFECTADA: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO UNPA, proceso 2020-00280 y 2020- 00281 en razón al presunto detrimento constituido mediante Hallazgo No. 72425 como resultado de la auditoría integral practicada a los recursos asignados a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, detrimento acaecido por los mismos hechos que en la presente actuación son objeto de reproche fiscal y que hacen parte del mismo hallazgo 72425, dentro de los asuntos enunciados este despacho profirió los fallos de responsabilidad fiscal Nos. 016 del 13 de diciembre de 2022 dentro del PRF-2020-00280 y Fallo No. 001 del 24 de marzo de 2023 dentro del PRF-2020-00281, los cuales al contener una decisión de fallo sin responsabilidad fiscal respecto de un vinculado fueron objeto de análisis en grado de consulta por parte de la Contraloría Delegada Para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, dependencia que se pronunció a través de las providencias Nos. Auto URF2-550 del 10 de mayo de 2023 del PRF- 2020-00280, y Auto No. 989 del 18 de agosto de 2023 del PRF-2020-00281, en el siguiente sentido: (La presunta cita la motivación del URF2-550 DEL 10 DE MAYO DE 2023) y el (Fallo No. 012 del 03 de noviembre de 2023 del PRF-2020-00038).

En el caso en estudio, se dan los mismos presupuestos que se han señalado en los procesos relacionados en el presente escrito, no pudiéndose proferir fallo sancionatorio con responsabilidad fiscal, al darse una violación al debido proceso, al derecho a la defensa, al no ser claros los cargos, en ningún momento del proceso se señala, aborda la razón o motivo por la cual se

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 32 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

considera que los recursos utilizados con las tarjetas de crédito, son de destinación específica para el financiamiento de la Educación, durante las vigencias 2016 y el porqué de que los presuntos gastos de representación solventados con estos recursos no tenían por qué hacerse con ellos.

RELACIÓN DE PRUEBAS

TESTIMONIALES Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

Solicito se citen y hagan comparecer para que, bajo la gravedad del Juramento, reconozcan contenido de documentos y firmas, como para que declaren sobre los hechos objeto de la investigación fiscal, conforme al interrogatorio que les formule, en forma verbal o escrita, a las siguientes personas:

Las siguientes personas:

Lucy Mar Bolaños Muñoz C.C. 31.389.285 de Buenaventura, en su calidad de exrectora de la Universidad del Pacífico. JOSE FELIX RIASCOS BENAVIDES, en su calidad de exrectora de la Universidad del Pacífico.

Los anteriores con el fin de que declaren sobre el procedimiento que se sigue en la asignación de las tarjetas de crédito y/o debito para los gastos de representación en la Universidad del pacifico, en la legalización de los gastos realizados con dichas tarjetas, en la expedición del CDP y RP, sobre el trámite que se sigue en tesorería para la legalización de los gatos de representación, sobre el control que se realiza en la Universidad del pacifico frente a los gastos de representación que se realizan con las tarjetas debido y crédito.

Los cuales podrán ser citados en el Kilómetro 13 vía al aeropuerto barrio el Triunfo, campus Universidad del Pacifico, oficina Sintraunicol, E mail: sintraunicolbuenaventura@gmail.com

POSICIÓN DEL DESPACHO:

Frente a los argumentos de defensa esbozados por la señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, este despacho se permite pronunciarse de la siguiente manera:

Para el presente caso, se encuentra probado que la señora RUIZ GARCIA, realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna en su calidad de tesorera, como también se observa incumplimiento de sus obligaciones consagradas en el Manual específico de funciones y competencias laborales Tesorería en su numeral 3 el cual establece “Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las gestiones financieras con los bancos, corporaciones, firmas y comisionistas, para el manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad”, ya que con la realización de los pagos de tarjetas de crédito a cargo de rectores mediante debitación automática de la cuenta corriente de titularidad de la Universidad, en la cual se administran recursos que tienen como finalidad la prestación del servicio educativo, se afectaron los recursos para el cumplimiento misional de la Universidad.

Por otra parte, resulta necesario advertir que frente a las funciones y obligaciones que le asisten a la vinculada como tesorera de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA, la señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, tenía en su cabeza la obligación de solicitar a los portadores de las tarjetas de créditos la relación de gastos

mensuales conforme al débito automático, puesto que frente a estos, tenía la obligación de ejercer control en razón a que hace parte de una gestión fiscal financiera con los bancos, velando por el debido manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad, ahora bien, resulta improcedente que la señora RUIZ GARCIA manifieste que el trámite ante el banco no estaba a cargo de la oficina de tesorería, sin embargo, como ya se ha reiterado, dicha función corresponde a su cargo conforme al manual de funciones y competencias laborales que reposa dentro del plenario de la presente investigación.

De igual modo, la vinculada como argumento de defensa expone y cita providencias de fondo proferidas por este órgano de control en los Procesos de responsabilidad Fiscal Nos. PRF-2020-00038, PRF-2020-00280 y PRF-2020-00281, indicando que a su criterio el presente caso cuenta con los mismos presupuestos que imposibilitaron en ellos a proferir fallo sancionatorio, respecto a esta apreciación resulta necesario por parte de esta colegiatura, indicar que mediante Auto No. URF2-1189 del 28 de agosto de 2024, proferido dentro del PRF-2020-00039, mediante el cual la Intersectorial No. 9 de la Contraloría General de la República, como superior y en ejercicio del grado de consulta, se pronunció de la siguiente manera con respecto a esa situación, “(...) Así mismo, si bien, esta Contraloría Delegada Intersectorial conoce las providencias proferidas por la Unidad de Responsabilidad Fiscal, citadas anteriormente sobre hechos similares a los del presente proceso; corresponde en este caso concreto apartarse de las conclusiones allí indicadas, por cuanto, para el presente proceso, es procedente y necesario continuar con la actividad probatoria, que permita aclarar sí existe o no, relación entre los bienes y servicios adquiridos con las tarjetas de crédito respectivas y el propósito u objetivo institucional de la entidad afectada (...)”.

Para el presente caso, este despacho tiene plenamente determinado el daño el cual se estableció por medio del informe técnico No. 2021IE0004285 del 22 de enero de 2021, el cual concluyó:

VIII. CONCLUSION

➤ Los usos y consumos por las Tarjeta de Créditos 4913306564897550 y 558723056453563, en la vigencia 2015 sumaron \$52.902.311,12, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla No. 004					
Resumen de las Compras y Usos de Tarjetas de Crédito					
Cifras en pesos					
RESUMEN DE LAS COMPRAS Y CARGO REALIZADOS					
POR EL USO DETARJETAS ASIGNADAS A JOSE FÉLIX RIASCO					
CONCEPTOS	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total	% Participación	
VIAJES -TRANSPORTE- DESPLAZAMIENTO	17.350.025,15	1.986.560,00	19.336.585,15	36,55%	
HOTELES - ALOJAMIENTO - ALQUILER	1.010.000,00	9.168.750,00	10.178.750,00	19,24%	
COMBUSTIBLE - GASTOS VEHÍCULO	525.104,00	3.954.887,00	4.479.991,00	8,47%	
ÓPTICA	174.001,00		174.001,00	0,33%	
RESTAURANTES- ALIMENTACIÓN	1.096.396,00	5.498.281,00	6.594.677,00	12,47%	
OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	913.328,00	10.517.514,00	11.430.842,00	21,61%	
GMF 4 X MIL CONSUMOS	84.275,40	124.667,22	208.942,62	0,39%	
INTERESES CORRIENTES	116.915,03	379.044,50	495.959,53	0,94%	
INTERESES DE MORA	631,70	1.931,12	2.562,82	0,00%	
TOTAL	21.270.676,28	31.631.634,84	52.902.311,12	100,00%	
Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563— Análisis CGR					

El rubro con mayor representatividad corresponde a servicio de viajes transporte y desplazamiento, por los cuales se contrajeron obligaciones por \$19.336.585,15 por viajes aéreos realizados; la equivalencia de estos gastos corresponde al 36,55% del total de las

compras.

Por otras compras y servicios se adquirieron obligaciones por \$11.604.843 equivalentes al 21,93%; las compras fueron realizadas en almacenes de cadena en su mayoría. Por servicios de hotelería, alojamiento y alquiler se adquirieron obligaciones por \$10.178.750 que representan el 19,24%; los servicios por este concepto fueron adquiridos en hoteles ubicados en los municipios de Buenaventura, Cali y Guapi.

Los gastos por consumos en restaurantes por \$6.594.677, representan el 12.47% del total de las compras realizadas. El consumo de combustible y gastos de vehículo generaron compromisos por \$4.479.991, representando el 8.47% del del uso de las tarjetas de crédito.

El 1,34% de los consumos que sumaron \$707.464,97, corresponden a los gastos incurridos por el pago de intereses e impuesto al gravamen (4x1000).

> La Universidad del Pacífico pagó \$52.619.815,50 por concepto de consumo y cargos de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 558723056453563, otorgada por el Banco de Occidente, seccional Buenaventura, a la Universidad del Pacífico en la vigencia 2015.

Tabla No. 005

Resumen Pagos Totales por TC 4913306564897550 – 5587723056453563

Valores en peso

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, POR EL USO DETARJETAS DE CREDITOS

ASIGNADAS A JOSE FELIX RIASCO BENAVIDES

FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
29/07/2015	3.470.000		3.470.000
20/11/2015	5.270.000		5.270.000
25/11/2015	8.453.000		8.453.000
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
29/07/2015		700.000,00	700.000
24/09/2015		3.270.000,00	3.270.000
15/10/2015		6.685.531,46	6.685.531
13/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000
5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$ 20.988.000,00	\$31.631.815,50	\$52.619.815,50

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR

En atención a los hechos, valores y fechas de pagos, que fundamentan los hechos del reproche fiscal dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF2020-00041, se concluye que la Universidad del Pacífico durante el periodo diciembre 2015 – enero de 2016, canceló \$13.030.000 por el uso de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 5587723056453563 y sobre los cuales el UNPA, no aporó documentos sobre la legalización de los gastos.

Tabla No. 006

Pagos de las Tarjetas de Créditos dentro del PRF-2020-00038

Valores en pesos

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, DETERMINADOS DENTRO EL PRF 2020-00038

FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000
5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$3.795.000	\$9.235.000	\$13.030.000

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR


- La falta de legalización de los gastos, genera:
- Que los registros de los hechos económicos derivados por el uso de las Tarjetas, no se efectuarán conforme a la normatividad presupuestal, contable y tributaria vigente en el 2015.
 - Incertidumbre relacionada con el propósito de los gastos, toda vez que no se tiene la certeza, si las tarjetas de créditos, fueron utilizadas para el cumplimiento de un propósito u objetivo institucional.

Dicho lo anterior, Las actuaciones de la señora FLOR ANLLELY RUIZ en su calidad de TESORERA durante la vigencia de la ocurrencia de los hechos, se relacionan en que al no ejercer un debido control de las debitaciones de los recursos depositados en la cuenta corriente No 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacifico, toda vez que estos fueron utilizados para el pago de obligaciones surgidas del consumo de tarjetas de crédito obligaciones que no tienen concordancia con la finalidad social que cumple la universidad.

Dentro del trámite del presente proceso, se reitera, se encuentra probado en plenario, que se realizaron debitaciones automáticas de los recursos depositados en la cuenta corriente No 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacifico, con el fin de pagar obligaciones causadas por el uso de tarjetas de crédito sin los respectivos soportes de estos gastos, obligaciones que no tienen concordancia con la finalidad social que cumple la universidad, habiéndose establecido que el cargo de tesorera tenía como función el control para el manejo eficiente de los recursos financieros de la Entidad, con su actuar queda demostrado la omisión del ejercicio de sus funciones por parte de la señora RUIZ GARCIA.

Por lo aquí expuesto, la conducta de la señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, como Tesorera de la Universidad del Pacífico, se debe calificar como gravemente culposa, toda vez que el daño causado al Patrimonio Público fue consecuencia del incumplimiento de sus funciones y deberes, teniendo en cuenta que no existen soportes que acrediten un adecuado manejo de los recursos y tampoco existen soportes de un adecuado control y seguimiento a los gastos efectuados con las tarjetas de crédito, durante la época de los hechos, como así lo establece el artículo 6 de la Ley 678 de 2001: La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Cómo ya se ha hecho mención, de conformidad con el Manual específico de funciones y competencias laborales dentro del III acápite de Funciones Esenciales Numeral 3. Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las gestiones financieras con bancos, corporaciones, firmas y comisionistas, para el manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad, dicho lo anterior, el presente daño

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 36 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

al erario generado surgió de la verificación del reporte de las partidas conciliatorias, Cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente y que, con recursos destinados específicamente para la educación, se realizaron pagos debitados automáticamente de la Cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico, por consumos de las tarjetas de crédito empresarial Nos. 4913306564897550 5587723056453563 a nombre de JOSE FELIX RIASCOS BENAVIDES. No obstante, se encontraba dentro de las funciones de la funcionaria FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, controlar las gestiones financieras con los bancos, y aun teniendo conocimiento de sus funciones, fue omisiva al momento de realizarlas, por consiguiente, su actuar omisivo influye en la participación del hecho generador del daño patrimonial.

Finalmente y en razón a que dentro de este proceso, no se allegó prueba, que soporte la legalización de los gastos realizados a través de las tarjetas de crédito empresarial Nos. 4913306564897550, y 5587723056453563, esta misma falta generó que los registros de los hechos económicos derivados del uso de las tarjetas, no se efectuaran conforme a la normatividad presupuestal, contable y tributaria vigente del año 2015, Incertidumbre relacionada con el propósito de los gastos, toda vez que no se tiene la certeza, si las tarjetas de créditos, fueron utilizadas para el cumplimiento de un propósito u objetivo institucional, por lo que el actuar omisivo de la señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, tuvo participación en el daño patrimonial ocasionado en razón a que la misma no realizó sus funciones en el sentido de que tenía la plena obligación de controlar las gestiones financieras con los bancos y que como evidencia hace mención en su versión libre a que no era posible hacer un control fiscal del gasto del funcionario ordenador del gasto, desconociendo de esta manera los deberes encomendados que tenía bajo su cargo como Tesorera.

- **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, notificación personal electrónica el 10/05/2023, visible en el archivo denominado “2023IE0064400 DEVOLUCION DILIGENCIAS PRF 2020-00041”, presentó argumentos mediante escrito con radicación No. 2023ER0091538 del 24/05/2023. Se transcriben los apartes más importantes:

“II FUNDAMENTOS FÁCTIVOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

En términos generales, para que se configure y reconozca la existencia de responsabilidad fiscal en un proceso determinado, es indispensable que en el acervo probatorio queden plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos constitutivos de la misma, esto es, una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al gestor fiscal, un daño patrimonial del Estado y un nexo causal entre los elementos previamente expuestos. En efecto, lo anterior ha sido establecido por la regulación colombiana, específicamente por el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual es claro al establecer lo siguiente:

“ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”

Al respecto, frente a los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, expediente 2108483, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, se ha manifestado en los mismos términos que se han venido desarrollando, como a continuación se expone:

“Para que pueda proferirse decisión declarando la responsabilidad fiscal es menester que en el procedimiento concurren tres características: (i) Un elemento objetivo consistente en que exista prueba que acredite con certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público, y, de otro, su cuantificación. (ii) Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquel haya actuado al menos con culpa. (iii) Un elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.”

En este sentido, a continuación, se argumentarán las razones por las cuales en el caso bajo estudio no se encuentran demostrados, siquiera sumariamente, la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, en particular el daño patrimonial al Estado y el dolo o culpa grave en la conducta del gestor fiscal. En consecuencia, el honorable Despacho no tendrá una alternativa diferente que proferir fallo sin responsabilidad fiscal en el proceso identificado con el No. PRF-2020-00041.

A. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - INEXISTENCIA DE DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.

Tal y como se expuso anteriormente, para que se configure la responsabilidad fiscal es imperativo que en el plenario se encuentre suficientemente acreditado un daño patrimonial al Estado. En este sentido, vale la pena analizar la sentencia C-340 de 2007, en la cual se explicó que, a diferencia del proceso de responsabilidad disciplinaria en donde el daño es extrapatrimonial y no susceptible de valoración económica, en la responsabilidad fiscal el perjuicio debe ser cierto y de contenido eminentemente patrimonial. El tenor literal del mencionado fallo es el siguiente:

“b. La responsabilidad que se declara a través de dicho proceso es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de quienes están a cargo de la gestión fiscal, pero es, también, patrimonial, porque se orienta a obtener el resarcimiento del daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

c. Como consecuencia de lo anterior, la responsabilidad fiscal no tiene un carácter sancionatorio -ni penal, ni administrativo-, sino que su naturaleza es meramente reparatoria. Por consiguiente, la responsabilidad fiscal es independiente y autónoma, distinta de las

responsabilidades penal o disciplinaria que puedan establecerse por la comisión de los hechos que dan lugar a ella.


Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia C-661 de 2000, al referirse a la distinta naturaleza del daño en la responsabilidad disciplinaria y en la fiscal, puntualizó que mientras que el daño en la responsabilidad disciplinaria es extrapatrimonial y no susceptible de valoración económica, el daño en la responsabilidad fiscal es patrimonial. En consecuencia, señaló la Corte, “... el proceso disciplinario tiene un carácter sancionatorio, pues busca garantizar la correcta marcha y el buen nombre de la cosa pública, por lo que juzga el comportamiento de los servidores públicos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública” , al paso que “... el proceso fiscal tiene una finalidad resarcitoria, toda vez que ‘el órgano fiscal vigila la administración y el manejo de los fondos o bienes públicos, para lo cual puede iniciar procesos fiscales en donde busca el resarcimiento por el detrimento patrimonial que una conducta o una omisión del servidor público o de un particular haya ocasionado al Estado”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se ha pronunciado en los mismos términos, al establecer que para que sea procedente la declaratoria de responsabilidad fiscal, definitivamente debe existir un daño patrimonial sufrido por parte del Estado. No obstante, no cualquier tipo de daño es susceptible de ser resarcido en un proceso fiscal, sino solo aquél que se encuentre debidamente acreditado, y que además, se predique respecto de una entidad u organismo estatal en concreto. Lo previamente explicado fue analizado tal y como se expone a continuación:

“La responsabilidad fiscal estará integrada por una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo entre los dos elementos anteriores. El daño patrimonial es toda disminución de los recursos del estado, que cuando es causada por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal. En este orden de ideas, todo daño patrimonial, en última instancia, siempre afectará el patrimonio estatal en abstracto. Sin embargo, cuando se detecta un daño patrimonial en un organismo o entidad, el ente de control debe investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal del servidor público frente a los recursos asignados a esa entidad u organismo, pues fueron solamente éstos los que estuvieron bajo su manejo y administración. Es decir, que el daño por el cual responde, se contrae al patrimonio de una entidad u organismo particular y concreto”. 2 (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En otras palabras, para que sea jurídicamente viable la declaratoria de responsabilidad fiscal en un proceso determinado, es esencial que el daño patrimonial al Estado se encuentre debidamente acreditado en el expediente. No obstante, del material demostrativo allegado al plenario, se observa que no se ha producido ningún daño patrimonial al Estado en este caso.

En este orden de ideas, se debe tomar en consideración que, si bien se observó que en la vigencia 2017, la Universidad del Pacífico contaba con 2 tarjetas de crédito del Banco de Occidente que fueron manejadas en

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 39 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

dicha vigencia por dos ex rectores, éstas se utilizaban para gastos de representación en variados eventos donde el rector se trasladaba a cumplir con sus compromisos en otras ciudades, o para la realización de eventos con funciones sustantivas de proyección social, investigación y academia, cumpliendo de esta manera con la misión y visión universitaria; es menester aclarar que en el manual de funciones del rector no se establecía específicamente el modo de utilización de estos dineros, aparte de “gastos de representación”, para lo cual fueron utilizados.

Siendo así las cosas, las sumas de dinero alegadas como detrimento patrimonial en contra de la Universidad del Pacífico, realmente fueron invertidas en gastos de representación en diferentes eventos con el fin de enaltecer la imagen de la institución y promover actividades de carácter académico e investigativo. Es por esto que no es posible hablar de un detrimento patrimonial causado a la institución universitaria, toda vez que dicha suma de dinero fue utilizada en aras de la educación.

Por esta razón, ante la inexistencia de un daño patrimonial causado en contra del Estado, es jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal, por lo que consecuentemente, el Despacho imperativamente tendrá que proferir fallo sin responsabilidad fiscal. Lo anterior, siguiendo lo consagrado en el artículo 54 de la ley 610 de 2000 el cual explica:

“Fallo sin responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.

De esta forma, resulta conducente proferir fallo sin responsabilidad fiscal respecto al presente proceso con radicación PRF-2020-00041.

B. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/O DOLO EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.


Es de suma importancia ponerle de presente al Despacho que, en cuanto la conducta dolosa o culposa atribuible al gestor fiscal, el grado del elemento culpa no puede ser uno distinto del dolo o de la culpa grave. Es decir, para que en un caso se encuentre plenamente acreditado el primero de los elementos de la responsabilidad fiscal, no es suficiente probar la existencia de culpa leve o levísima en el patrón de conducta del gestor, sino que dicho patrón constituya una actuación dolosa o gravemente culposa. Lo anterior, ha sido explicado puntualmente por la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-619 de 2002, que declaró inexecutable específicamente el parágrafo segundo del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que fijaba a la culpa leve como requisito de configuración del primer elemento de la responsabilidad. En efecto, el tenor literal de la providencia de la Corte Constitucional que explica que el grado de culpa en la responsabilidad fiscal es únicamente aquél que demuestre una conducta dolosa o gravemente culposa, es el siguiente:

“6.4. Pero no sólo eso. El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta. Ello, en el entendido que, según lo dijo la Corte en la citada Sentencia SU-620 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la responsabilidad fiscal es tan sólo una "especie de la responsabilidad que en general se puede exigir a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el servicio o el patrimonio público.”

6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de responsabilidad y remite a la culpa leve. Así, mientras un agente estatal que no cumple gestión fiscal tiene la garantía y el convencimiento invencible de que su conducta leve o levísima nunca le generará responsabilidad patrimonial, en tanto ella por expresa disposición constitucional se limita sólo a los supuestos de dolo o culpa grave, el agente estatal que ha sido declarado responsable fiscalmente, de acuerdo con los apartes de las disposiciones demandadas, sabe que puede ser objeto de imputación no sólo por dolo o culpa grave, como en el caso de aquellos, sino también por culpa leve.

6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición. Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación proporcional pues, al fin de cuentas, de lo que se trata es de resarcir el daño causado al Estado. En el caso de la responsabilidad patrimonial, a través de la producción de un daño antijurídico que la persona no estaba en la obligación de soportar y que generó una condena contra él, y, en el caso de la responsabilidad fiscal, como consecuencia del irregular desenvolvimiento de la gestión fiscal que se tenía a cargo.

6.10. En relación con esto último, valga destacar que la Corte, primero en la Sentencia C-046 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y luego en la Sentencia T-973 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), advirtiendo el vacío legislativo dejado por la Ley 42 de 1993 -relativa a la organización del sistema de control fiscal financiero-, ya se había ocupado de reconocer el alto grado de afinidad temática existente entre la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad fiscal, al establecer que a esta última le era aplicable el mismo término de caducidad fijado por el Código Contencioso Administrativo para la acción de reparación directa (C.C.A. art. 136-78). En efecto, recogiendo el criterio sentado en la providencia inicialmente citada, dijo la Corporación en la Sentencia T-

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 41 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

973 de 1999, lo siguiente:

"El código contencioso administrativo establece en su artículo 136, subrogado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, los términos de caducidad de las acciones, que para el caso de la acción de reparación directa, se fija en dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. Y es este mismo término el que, por la remisión expresa que hace el artículo 89 de la ley 42 de 1993 a las normas del código contencioso administrativo, y dada la concordancia y afinidad que tiene con la acción de reparación directa, se aplica para el proceso de responsabilidad fiscal".

6.11. En consecuencia, queda pues superada aquella percepción equivocada, de que el daño patrimonial que le pueden causar al Estado los agentes que no cumplen función fiscal tiene tal grado de diferenciación con el perjuicio que le pueden causar los fiscalmente responsables, que justifica o admite respecto de los segundos un tratamiento de imputación mayor. Por el contrario, visto el problema desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que, por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad material. En esta medida, el grado de culpa leve a que hacen referencia expresa los artículos 4º parágrafo 2º y 53 de la Ley 610 de 2000 es inconstitucional y será declarado inexecutable en la parte resolutive de esta Sentencia." 3 (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En otras palabras, la Corte Constitucional fue completamente clara en su sentencia al establecer que el primero de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal única y exclusivamente se cumplirá en el evento que el patrón de conducta del gestor fiscal sea aquél que se enmarque en el dolo o la culpa grave. Lo anterior, a su vez genera indefectiblemente que para que pueda predicarse la responsabilidad fiscal respecto de determinada persona, es necesario demostrar que su actuación fue realizada de forma gravemente culposa o indiscutiblemente dolosa. Por supuesto, este planteamiento correlativamente impide declarar la responsabilidad fiscal en aquellos eventos en los cuales la actuación del gestor fiscal se enmarque únicamente dentro de la culpa leve o levísima.

Señalado lo anterior, resulta de gran importancia examinar si la actuación de los señores FÉLIX SUÁREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCÍA puede ser catalogada como una conducta dolosa o gravemente culposa, a la luz de los elementos probatorios que obran en el plenario. En este sentido, se deben iniciar abordando los conceptos de culpa grave y dolo, que por mandado del artículo 63 del Código Civil, son conceptos que deben asimilarse cuando se realizan análisis de responsabilidad.

En este orden de ideas, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave de la siguiente forma:

"ARTICULO 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Frente al particular, La Corte Suprema de justicia definió el concepto de culpa grave tal y como se evidencia a continuación:

“Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta ‘una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes’ (Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1971, pág.89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, T.I., Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1998, pág.228).”⁴(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En resumen, la culpa grave es un concepto jurídico que puede identificarse con todos aquellos comportamientos supremamente negligentes que son llevados a cabo por parte de las personas más descuidadas. Ahora, en lo que respecta al dolo, nuevamente se debe abordar el ya analizado artículo 63 del C.C. el cual explica:

“ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Frente al particular, La Corte Suprema de justicia definió el concepto de dolo tal y como se evidencia a continuación:

“[l]as voces utilizadas por la ley (Art. 63 C.C.) para definir el dolo concuerdan con la noción doctrinaria que lo sitúa y destaca en cualquier pretensión de alcanzar un resultado contrario al derecho, caracterizada por la conciencia de quebrantar una obligación o de vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye pues, por la intención maliciosa (...)” (subrayado y negrilla fuera del texto original)⁵

En otras palabras, para endilgarle responsabilidad fiscal a las personas previamente identificadas, es indispensable que, utilizando los elementos probatorios conducentes, pertinentes y útiles, se acredite indefectiblemente un patrón de conducta supremamente negligente que se asimile al de las personas más descuidadas, o a la intención positiva de causar un menoscabo al patrimonio público.

Ahora bien, al analizar el acervo probatorio que obra en el plenario, resulta fundamental ponerle de presente que de conformidad con las versiones libres brindadas por Félix Suárez Reyes, Flor Anllely Ruiz García y Enver Mosquera Hurtado, se establece en el manual de funciones al rector de la institución como su representante ante la sociedad, y que, para que cumpla con dicho fin, se le asignan ciertos recursos (que para el caso concreto serían las tarjetas de crédito

aprobadas por el consejo superior de la universidad) los cuales el rector, en su calidad de ordenador del gasto, dispone en el cumplimiento de sus funciones, e informa al área de tesorería y la dirección administrativa y financiera para el respectivo control y autorización de los certificados de disponibilidad. De esta manera, el rector cumplió a cabalidad con sus funciones de representación e imagen, y el área financiera con el respectivo reporte de dichos gastos.

Así las cosas, en ningún escenario la conducta de estas personas puede ser catalogada como una actuación negligente que se asimile al de las personas más descuidadas (gravemente culposa), o con una intención positiva y maliciosa de causar un daño al patrimonio público (dolosa), toda vez que existen elementos probatorios, conducentes, pertinentes y útiles que sin duda alguna acreditan una preocupación por cumplir con sus funciones, de suerte que, al no existir prueba fehaciente del elemento que aquí se discute, corresponderá al ente de control declarar su inexistencia y proceder a proferir un fallo sin responsabilidad fiscal.

En conclusión, luego de haber analizado la totalidad de las pruebas que obran en el expediente, es claro que de ninguna manera puede endilgarse una actuación dolosa o gravemente culposa a los señores FÉLIX SUÁREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLEY RUIZ GARCÍA. Sin embargo, si por alguna razón el honorable Despacho llega a considerar que su actuación contiene elementos subjetivos que comportan la culpa, resulta fundamental que tenga en cuenta, que aún en ese improbable evento, dicho elemento de ninguna forma puede ser catalogado como gravemente culposo o doloso. En consecuencia, al faltar el elemento de la culpa grave y/o dolo en el patrón de conducta de los implicados, es jurídicamente improcedente una declaratoria de responsabilidad fiscal de esta naturaleza.

Por esta razón, ante la inexistencia de una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de los presuntos responsables, automáticamente se desvirtúa la posibilidad de estatuir un nexo de causalidad entre lo endilgado y el supuesto detrimento, de suerte que no concurren los elementos sine qua non para que se estructure la responsabilidad fiscal en cabeza de los investigados por lo cual resulta jurídicamente procedente proferir el correspondiente fallo sin responsabilidad fiscal.

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE A LA VINCULACIÓN DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Antes de referirme a las razones por las cuales la Contraloría debe desvincular a mi representada en calidad de tercero civilmente responsable, es pertinente precisar que, al momento de proferirse el auto de apertura dentro del presente trámite, en el cual además se ordenó la vinculación de la Compañía de Seguros que represento, se omitió efectuar el estudio de las condiciones particulares y generales del contrato de seguro. En efecto, el Honorable Juzgador no tuvo en cuenta que la póliza incorporada en el expediente no goza de ningún tipo de cobertura, lo cual indudablemente contraviene el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, el cual dispone:

“Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella.”

Sobre el particular, se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, radicación No. 25000-23-24-000-2002-00907-01, al señalar:

“El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En ese contexto, la vinculación del garante se encuentra circunscrita al riesgo amparado, pues de lo contrario, la norma ya mencionada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no cubiertos por ellas.


Ahora, es importante tener en cuenta que para efectuar la vinculación de una compañía de seguros deben tenerse en cuenta y acatarse las directrices planteadas en el instructivo No. 82113-001199 del 19 de junio de 2002, proferido por la Contraloría General de la Republica. Este instructivo regula y aclara el procedimiento de vinculación del asegurador a los Procesos de Responsabilidad Fiscal a que se refiere el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000.

De este modo, en aquel documento se estableció que, antes de vincular a una aseguradora, deben observarse algunos aspectos fundamentales respecto de la naturaleza del vínculo jurídico concretado en el contrato de seguros correspondiente. Por cuanto de la correcta concepción de esa relación convencional, se puede determinar si se debe o no hacer efectiva la garantía constituida en la póliza.

El citado instructivo emitido con base en la Ley 610 de 2000, precisó las condiciones o requisitos para la procedencia de la vinculación de las aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal, determinando que:

“(…) 2. Cuando se vinculan...-las aseguradoras- se deben observar las siguientes situaciones:

a) Verificar la correspondencia entre la causa que genera el detrimento de tipo fiscal y el riesgo amparado: Por ejemplo: Si se responsabiliza por sobrecostos en un contrato y la póliza cubre únicamente el cumplimiento

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 45 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

y calidad del objeto contratado, no hay lugar a vincularla, por cuanto los sobre costos no son un riesgo amparado y escapan al objeto del seguro.

b) Establecer las condiciones particulares pactadas en el contrato de seguro, tales como vigencia de la póliza, valor asegurado, nombre de los afianzados, existencia de un deducible, etc., eso para conocer el alcance de la garantía, toda vez que de estas condiciones se desprenderá la viabilidad de la vinculación de la Compañía aseguradora al proceso.

c) Examinar el fenómeno de la prescripción, que si bien es cierto, por vía del art. 1081 del Código de Comercio, es de dos años la ordinaria y de cinco la extraordinaria (...) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Conforme a lo anterior, es claro que la vinculación de la aseguradora debe estar condicionada a la estricta observancia o análisis previo de las pólizas invocadas para efectuar su vinculación, debiendo sujetarse a las condiciones contractuales del aseguramiento, independientemente del carácter y magnitud de la eventual infracción fiscal. Lo anterior, para determinar si es o no procedente su vinculación, siempre que no se configure alguna causal de inoperancia del contrato de seguro.

En efecto, como lo ha manifestado el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, en el fallo del 18 de marzo de 2010, la vinculación de las compañías de seguros no se efectúa a título de responsable fiscal, sino de tercero civilmente responsable, precisamente en razón a que su participación en el proceso se deriva única y exclusivamente del contrato de seguro y no de algún acto fiscal, o de una conducta suya que pudiera resultar lesiva para el erario público. Es por esto, que su responsabilidad se circunscribe a una de tipo civil o contractual, pero no fiscal, debiendo regirse precisamente por lo establecido en el derecho comercial sobre este particular.

En el caso particular, es evidente que el ente de control no efectuó el análisis y estudio de las condiciones pactadas en la póliza de seguro No. 3000075, limitándose exclusivamente a enunciar la existencia de esta. Es evidente que, de haberse realizado el respectivo examen, definitivamente la conclusión sería que los hechos objeto de la acción fiscal no se encuentran cubiertos bajo el contrato de seguro documentado en la póliza antes referida.

Dicho lo anterior, se presentarán los argumentos por los cuales se solicita la desvinculación de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. así:

A. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.

Es fundamental que el Honorable Despacho tome en consideración que, en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el

contrato de seguro, la Compañía Aseguradora en virtud de la facultad que se consagra en el artículo 1056 del Código de Comercio, puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado. Es de esta forma, como se explica que al suscribir el contrato aseguraticio respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo, de tal manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes.

En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

(...) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato aseguraticio. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...). (Subrayado y negrilla fuera del texto original)⁶

Lo anteriormente mencionado, debe ser interpretado armónicamente con los principios generales del Derecho Comercial denominados “autonomía de la voluntad” y “buena fe”, tal como lo explica la Corte Constitucional en sentencia T-065 de 2015, de la siguiente manera:

“La celebración y ejecución de los contratos civiles y comerciales debe desarrollarse de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe. Así lo señala el Código Civil en sus artículos 1602 y 1603, y la Constitución Política en su artículo 83. El primero de estos principios, también conocido como pacta sunt servanda, establece que las personas naturales o jurídicas tienen la facultad de contraer

libremente obligaciones y/o derechos mediante la celebración de contratos. Una vez manifiestan allí su voluntad y llegan a un acuerdo, el contrato se transforma en una ley para las partes. Su terminación queda sujeta a la realización de un nuevo acuerdo, o al cumplimiento de una de las causales previstas en la ley o en el mismo contrato. Por lo tanto, mientras no hayan establecido otra cosa, ninguna de ellas queda autorizada para alterar los términos contractuales de manera unilateral porque, de lo contrario, le impondría a la otra una obligación, o le concedería un derecho que jamás consintió. Lo anterior implica que, por regla general y sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley, cualquier modificación de un contrato debe estar sometida al concurso de todas las personas que lo celebraron.

[...]

5.3. Según lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte, tratándose específicamente de un contrato de seguro, la buena fe que se espera de las partes es cualificada. Es decir, que la persona no solo debe tener conciencia de celebrar y ejecutar el contrato de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y la finalidad que persiguen los firmantes. Sino que, además, debe tener certeza de que efectivamente lo está haciendo. De esta manera, la buena fe aplicable a este tipo de situaciones exige un elemento subjetivo, que se refiere a la intención del actor, y un objetivo, que tiene que ver con la efectiva realización del comportamiento esperado.

5.4. En conclusión, la celebración y ejecución de un contrato de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe, le permite a cada uno de los contratantes confiar en la palabra del otro y tener una expectativa cierta de los efectos jurídicos del acuerdo celebrado. De esta manera, la alteración unilateral de alguno de los términos contractuales, o su lectura literal y maliciosa, se traducirían en un acto sorpresivo que traicionaría la confianza depositada.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 1056 del Código de Comercio, las entidades aseguradoras pueden asumir a su arbitrio, con la salvedad que dispone la ley, los riesgos que le sean puestos a su consideración, pudiendo establecer las condiciones en las cuales asumen los mismos. En este orden de ideas y como se ha venido exponiendo de forma transversal en el documento, no resulta jurídicamente admisible declarar la responsabilidad fiscal en el caso concreto, como quiera que no se ha realizado el riesgo asegurado, esto es, no se encuentran acreditados los requisitos listados en el 5 de la Ley 610 de 2000 en cabeza de los presuntos responsables.

En otras palabras y recapitulando las conclusiones a las que se llegó al inicio del escrito, resulta evidente la improcedencia jurídica y fáctica de declarar la existencia de dicha responsabilidad fiscal, por cuanto de los elementos probatorios que obran en el plenario, no se vislumbra ni acredita un patrón de conducta que demuestre una actuación gravemente culposa o dolosa en cabeza de los presuntos responsables, ni de daño patrimonial a la administración pública.

De esta manera, al ser jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de los señores FÉLIX SUÁREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCÍA, se

debe concluir que tampoco se puede exigir pago alguno a mi procurada, derivado de la Póliza de Seguro No. 3000075, lo que por sustracción de materia significa, la no realización del riesgo asegurado. En consecuencia, el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS del proceso de responsabilidad fiscal identificado con el expediente No. PRF-2020-00041.

B. FALTA DE COBERTURA MATERIAL PARA EL SEÑOR FÉLIX SUÁREZ REYES AL NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS CARGOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Es menester aclarar que en la póliza seguro manejo póliza global sector oficial No. 3000075 expedida por mi poderdante, se brinda un listado taxativo de los funcionarios amparados por la misma, y en la cual no está incluido el señor Félix Suárez Reyes:

FUNCIONARIOS UNIVERSIDAD DEL PACIFICO:	
1.JOSE FELIX RIASCOS BENAVIDES CC 16.658.033	RECTOR
2.ENVER MOSQUERA HURTADO CC 16.499.840	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
3.FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA CC 66.943.241	TESORERA
4.CARLOS ALBERTO CARABALI CC 16.476.411	ALMACENISTA
5.FLORESMIRO MURILLO HINOJOSA CC 16.483.004	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
4	


Siendo así las cosas, y en el hipotético caso en que su despacho profiera fallo con responsabilidad fiscal a los endilgados, es menester tener en cuenta que únicamente los actos de los señores ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCÍA serían cubiertos por la póliza expedida por mi poderdante.

C. DE ACREDITARSE UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, EN TODO CASO, EL DOLO COMPORTA UN RIESGO INASEGURABLE.

Partiendo del análisis que se realizó anteriormente, en donde se expuso que para que se reúnan los elementos configurativos de la responsabilidad fiscal es necesario que se demuestre fehacientemente el dolo o la culpa grave en la conducta del gestor, resulta fundamental ponerle de presente al honorable Despacho que, aun en el improbable evento en el que se encuentre acreditada una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de los señores FÉLIX SUÁREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCÍA, la Compañía Aseguradora no está llamada a responder patrimonialmente.

En este sentido, es de suma importancia explicar que el artículo 1055 del Código de Comercio contiene una disposición de ineficacia en el marco de las reglamentaciones que rodean a los contratos de seguro. Dicha normativa, establece expresamente que las actuaciones dolosas o gravemente culposas comportan riesgos inasegurables, por lo que cualquier pacto en contrario será ineficaz de pleno derecho. El tenor literal de dicha norma puntualiza:

“ARTÍCULO 1055. . El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 49 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

sanciones de carácter penal o policivo.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por esta razón, en el evento en el que se considere que la actuación de los presuntos responsables sí se enmarca dentro del dolo o la culpa grave, es claro que no se podrá ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguro No. 3000075, por cuanto dichos riesgos no son asegurables. En consecuencia, aun ante esta remota circunstancia, el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS del proceso de responsabilidad fiscal identificado con el expediente No. PRF-2020-00041 por cuanto, es claro que el dolo y la culpa grave representan hechos no cubiertos ni amparados.

D. EXCLUSIONES EXPRESAS EN LA PÓLIZA 3000075 EXPEDIDA POR LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

En el hipotético caso que se profiera un fallo con responsabilidad fiscal a los implicados, es menester tener en cuenta las exclusiones expresas en las condiciones generales de la póliza, por cuanto éstas son delimitantes en el contrato de seguro suscrito entre mi poderdante y la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO- UNPA, las cuales son:

EXCLUSIONES

La presente póliza no ampara las pérdidas que sufra la entidad asegurada como consecuencia de:

- A) Mermas o daños que sufran los bienes o valores por cualquier causa natural, salvo si se probare dolo o culpa grave de alguno de los servidores públicos cuyo cargo se ampara.*
- B) Mermas o daños que sufran los bienes o valores por incendio, explosión, erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza, guerra civil e internacional, huelgas, asonadas, motines, movimientos subversivos, y en general, conmociones populares de cualquier clase. Igualmente cualquier delito o faltante fiscal de los cubiertos por esta póliza en que incurra uno o varios servidores públicos al amparo de situaciones creadas por los eventos especificados en el párrafo anterior.*
- C) Multas o sanciones administrativas o disciplinarias impuestas al servidor público a la entidad asegurada.*
- D) Créditos concedidos por la entidad estatal asegurada a un servidor público, aún cuando se hayan otorgado a buena cuenta o anticipo sobre comisiones, honorarios, sueldo o cualquier otro concepto, que no fueran pagados por cualquier causa.*
- E) Mermas, diferencias de inventarios y desapariciones o pérdidas que no sean imputables a un servidor público determinado, o aquellas respecto de las cuales no se pueda establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar independientemente que se otorgue el amparo de personal no identificado.*

- F) Pérdidas derivadas de la conducta de servidores públicos que ocupen nuevos cargos creados por el asegurado, cuando no se haya informado a la compañía después de los treinta (30) días siguientes de la ocupación del nuevo cargo.*
- G) Lucro cesante o ingresos esperados o cualquier pérdida consecuencia que sufra el asegurado derivada de una pérdida amparada por esta póliza.*
- H) Actos conocidos o no por el asegurado ejecutados por sus servidores públicos con anterioridad a la fecha de iniciación del seguro o con posterioridad a su vencimiento.*
- I) Pérdidas patrimoniales sufridas por la entidad estatal asegurada por fuera de la vigencia de la presente póliza.*
- J) Pérdidas derivadas de pagos realizados a terceros equivocadamente o de créditos concedidos a terceros no pagados por cualquier causa, salvo cuando la conducta se tipifique como delitos contra la administración pública o genere un fallo con responsabilidad fiscal contra el servidor público.*
- K) Pérdidas resultantes de faltantes de caja debidos a errores del cajero.*
- L) Pérdidas causadas por cualquier acto intencional o doloso de la entidad asegurada.*
- M) Pérdida de bienes mientras sean objeto de movilización fuera de los predios del asegurado, o que se encuentren bajo la custodia de firmas transportadoras.*
- N) Pérdidas derivadas de actos de un servidor público, cuando en la vinculación del mismo a la entidad no se haya verificado la veracidad de los datos contenidos en su solicitud de empleo, o no se haya solicitado el pasado judicial vigente y sin antecedentes, certificado de antecedentes disciplinarios vigente y sin antecedentes, certificado de antecedentes fiscales sin antecedentes.*
- O) Actos de terceros que constituyan delito de hurto en todas sus modalidades (Simple, calificado o agravado) delito de estafa, falsedad y asimilados, todo de acuerdo con la legislación penal vigente en Colombia. Cuando mediante convenio expreso la compañía de seguros otorgue cobertura a dichas conductas, el amparo estará circunscrito a la comisión de estos delitos por parte de servidores públicos de la entidad, y en ningún caso por parte de terceros, ni aún en los eventos en que se otorgue cláusula de personal no identificado.*
- Así las cosas, toda conducta que se encuentre expresa en las exclusiones de la póliza, no será amparada.*

E. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa, sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido,

sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS exclusivamente bajo esta hipótesis, el ente de control deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización” 7 (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante, y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido, que en este caso resulta ser la siguiente, para los amparos que a continuación se relacionan:

CARGAR A: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		4. CONTADO - 30	\$25.000.000,00
Riesgo: 1 - CL 6 54 10, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA			
OBJETO DEL SEGURO: MANEJO			
AMPAROS CONTRATADOS			
No. Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1 COBERTURA DE MANEJO OFICIAL	25.000.000,00	SI	2.000.000,00
Deducible: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MIN 3.00 SMMLV			
2 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	25.000.000,00	NO	0,00
3 FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	25.000.000,00	NO	0,00
Beneficiarios			
Nombre/Razon Social	Documento	Porcentaje	Tipo Beneficiario
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	835.000.300-4	100	ONEROSO
MANEJO GLOBAL SECTOR ESTATAL (BASICO)			
OBJETO DEL SEGURO: AMPARAR AL ASEGURADO CONTRA LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES SUFRIDAS EN VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, QUE IMPLIQUEN EL MENOSCABO DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS, CAUSADOS POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE LOS CARGOS AMPARADOS, POR INCURRIR EN CONDUCTAS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE GENEREN FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO LA PERDIDA Y LA CONDUCTA QUE LE DIO ORIGEN AL DAÑO TENGA LUGAR DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. RELACION DE CARGOS AMPARADOS: 5			

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el Contrato de Seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dicha póliza contienen unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el ente fiscal en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

POSICIÓN DEL DESPACHO:

Frente a los argumentos esbozados por el apoderado judicial del Tercero Civilmente Responsable LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, esta colegiatura se permite pronunciarse de la siguiente manera:

Con respecto a los argumentos **A. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - INEXISTENCIA DE DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.** y **B. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/O DOLO EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.**

Inicialmente resulta necesario indicar que el Proceso de Responsabilidad tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal, lo anterior, con forme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, no obstante, esta misma ley en sus artículos 23 y 53, consagrada que el fallo con responsabilidad fiscal solo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado, así las cosas y con respecto al lleno de requisitos de existencia de un daño patrimonial al estado, para el presente caso, se tiene los siguientes medios probatorios:

Informe Técnico No. 2021IE0004285 del 22 de enero de 2021, emitido por la Profesional Universitaria LUZ YANETH MORENO OCHOA profesional en contaduría, informe en el cual se concluyó las siguientes:

VIII. CONCLUSION



GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.

➤ Los usos y consumos por las Tarjeta de Créditos 4913306564897550 y 558723056453563, en la vigencia 2015 sumaron \$52.902.311,12, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla No. 004
Resumen de las Compras y Usos de Tarjetas de Crédito

Cifras en pesos

RESUMEN DE LAS COMPRAS Y CARGO REALIZADOS POR EL USO DETARJETAS ASIGNADAS A JOSE FÉLIX RIASCO				
CONCEPTOS	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total	% Participación
VIAJES -TRANSPORTE- DESPLAZAMIENTO	17.350.025,15	1.986.560,00	19.336.585,15	36,55%
HOTELES - ALOJAMIENTO - ALQUILER	1.010.000,00	9.168.750,00	10.178.750,00	19,24%
COMBUSTIBLE - GASTOS VEHÍCULO	525.104,00	3.954.887,00	4.479.991,00	8,47%
ÓPTICA	174.001,00		174.001,00	0,33%
RESTAURANTES- ALIMENTACIÓN	1.096.396,00	5.498.281,00	6.594.677,00	12,47%
OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	913.328,00	10.517.514,00	11.430.842,00	21,61%
GMF 4 X MIL CONSUMOS	84.275,40	124.667,22	208.942,62	0,39%
INTERESES CORRIENTES	116.915,03	379.044,50	495.959,53	0,94%
INTERESES DE MORA	631,70	1.931,12	2.562,82	0,00%
TOTAL	21.270.676,28	31.631.634,84	52.902.311,12	100,00%

Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563– Análisis CGR

El rubro con mayor representatividad corresponde a servicio de viajes transporte y desplazamiento, por los cuales se contrajeron obligaciones por \$19.336.585,15 por viajes aéreos realizados; la equivalencia de estos gastos corresponde al 36,55% del total de las compras.

Por otras compras y servicios se adquirieron obligaciones por \$11.604.843 equivalentes al 21,93%; las compras fueron realizadas en almacenes de cadena en su mayoría. Por servicios de hotelería, alojamiento y alquiler se adquirieron obligaciones por \$10.178.750 que representan el 19,24%; los servicios por este concepto fueron adquiridos en hoteles ubicados en los municipios de Buenaventura, Cali y Guapi.

Los gastos por consumos en restaurantes por \$6.594.677, representan el 12.47% del total de las compras realizadas. El consumo de combustible y gastos de vehículo generaron compromisos por \$4.479.991, representando el 8.47% del del uso de las tarjetas de crédito.

El 1,34% de los consumos que sumaron \$707.464,97, corresponden a los gastos incurridos por el pago de intereses e impuesto al gravamen (4x1000).

➤ La Universidad del Pacífico pagó \$52.619.815,50 por concepto de consumo y cargos de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 558723056453563, otorgada por el Banco de Occidente, seccional Buenaventura, a la Universidad del Pacífico en la vigencia 2015.

Tabla No. 005
Resumen Pagos Totales por TC 4913306564897550 – 5587723056453563

Valores en pesos

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, POR EL USO DETARJETAS DE CREDITOS ASIGNADAS A JOSE FELIX RIASCO BENAVIDES			
FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
29/07/2015	3.470.000		3.470.000
20/11/2015	5.270.000		5.270.000
25/11/2015	8.453.000		8.453.000
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
29/07/2015		700.000,00	700.000
24/09/2015		3.270.000,00	3.270.000
15/10/2015		6.685.531,46	6.685.531
13/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000

5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$ 20.988.000,00	\$31.631.815,50	\$52.619.815,50

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR

En atención a los hechos, valores y fechas de pagos, que fundamentan los hechos del reproche fiscal dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF2020-00041, se concluye que la Universidad del Pacífico durante el periodo diciembre 2015 – enero de 2016, canceló \$13.030.000 por el uso de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 5587723056453563 y sobre los cuales el UNPA, no aportó documentos sobre la legalización de los gastos.


Tabla No. 006
Pagos de las Tarjetas de Créditos dentro del PRF-2020-00038

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, DETERMINADOS DENTRO EL PRF 2020-00038			
Valores en pesos			
FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000
5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$3.795.000	\$9.235.000	\$13.030.000

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR

- La falta de legalización de los gastos, genera:
- Que los registros de los hechos económicos derivados por el uso de las Tarjetas, no se efectuarán conforme a la normatividad presupuestal, contable y tributaria vigente en el 2015.
 - Incertidumbre relacionada con el propósito de los gastos, toda vez que no se tiene la certeza, si las tarjetas de créditos, fueron utilizadas para el cumplimiento de un propósito u objetivo institucional.

Adicionalmente, Certificación del 08 de septiembre de 2021, en la cual secretario general HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES, certifica que por medio del Consejo Superior no se ha expedido ningún documento que autoriza la asignación de gastos de representación al rector por medio de las tarjetas de crédito durante la vigencia, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020.

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 55 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

CERTIFICA:

De acuerdo a los archivos que reposan en la oficina de Secretaría General, me permito informar que por medio del Consejo Superior no se ha expedido ningún documento que autoriza la asignación de gastos de representación al rector por medio de tarjetas de crédito durante la vigencia 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Dado en Buenaventura, a los ocho (08) días del mes de septiembre 2021.

HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES
Secretario General

Certificación del 13 de septiembre de 2021, emitida por el Directo Administrativo y Financiero de la Universidad del Pacifico, NIKO HERNANDO DURÁN PALACIOS, en la cual indicó que la Universidad del Pacifico, no contaba con un procedimiento para la realización de gastos de representación con las Tarjetas de Crédito Banco de Occidente en las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, precisando, que la Universidad cuenta con el Procedimiento Solicitud y legalización de avances de viáticos, gastos de viaje y apoyo económico.

Dentro del trámite del presente asunto se estableció probatoriamente que en la Universidad del pacifico no existían, durante la vigencia de ocurrencia de los hechos, los gastos de representación para los rectores ni para ningún funcionario de ese establecimiento, motivo por el cual los argumentos planteados por los vinculados como por el tercero civilmente responsable no son aceptados por este despacho.

Por otra parte, respecto a la culpa grave endilgadas a las conductas desplegadas por los señores FELIX SUAREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, se precisa que esta entidad estimo esta graduación de culpa bajo el criterio de que el señor FELIX SUAREZ REYES en su calidad de RECTOR de la Universidad del Pacifico – UNPA – durante la vigencia de la ocurrencia de los hechos realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna al no cumplir cabalmente con lo establecido en el manual de funciones en los numerales 20 y 27 los cuales establecen “*Desarrollar la misión, principios y objetivos de la Universidad del pacifico, consagrados en el estatuto general*” y “*Dirigir todo lo relacionado con la conservación y la administración del patrimonio de la universidad del pacifico*”, ya que con la realización de los pagos de tarjetas de crédito a cargo de rectores mediante debitación automática de la cuenta corriente de titularidad de la universidad en la cual se administran recursos que tienen como finalidad la prestación del servicio educativo, se afectó el cumplimiento misional de la entidad.

Las actuaciones del señor SUAREZ REYES respecto del negocio jurídico en cuestión, se relacionaron a que en su calidad de Rector no garantizó el cumplimiento de la misión, principios y objetivos educativos de la universidad al destinar recursos específicos con fines distantes a la educación, toda vez que el pago de obligaciones surgidas del consumo de tarjetas de crédito dista del fin social establecido para la universidad.

El señor ENVER MOSQUERA HURTADO en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la Universidad del Pacífico – UNPA – durante la vigencia de la ocurrencia de los hechos, realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna al no cumplir cabalmente con los establecido en el manual de funciones en los numerales 2 y 3 *“Dirigir, coordinar y controlar la administración de los recursos financieros y humanos de la universidad”* *“Dirigir, controlar y coordinar actividades presupuestales y financieras de la institución de conformidad con las disposiciones sobre la materia”*, ya que con la realización de los pagos de tarjetas de crédito a cargo de rectores mediante debitación automática de la cuenta corriente de titularidad de la universidad en la cual se administran recursos que tienen como finalidad la prestación del servicio educativo, se afectaron los recursos para el cumplimiento misional de la universidad.

Las actuaciones del señor MOSQUERA HURTADO respecto del negocio jurídico en cuestión, se relacionaron a que en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO al no ejercer un debido control de la destinación de los recursos depositados en la cuenta corriente No 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacífico, toda vez que estos fueron utilizados para el pago de obligaciones surgidas del consumo de tarjetas de crédito obligaciones que no tienen concordancia con la finalidad social que cumple la universidad.

La señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA en calidad de TESORERA de la Universidad del Pacífico – UNPA durante la vigencia de la ocurrencia de los hechos, realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna al no cumplir cabalmente con lo establecido en el manual de funciones en el numeral 3 *“Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las gestiones financieras con los bancos, corporaciones, firmas y comisionistas, para el manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad”*, ya que con la realización de los pagos de tarjetas de crédito a cargo de rectores mediante debitación automática de la cuenta corriente de titularidad de la universidad en la cual se administran recursos que tienen como finalidad la prestación del servicio educativo, se afectaron los recursos para el cumplimiento misional de la universidad.

Las actuaciones de la señora FLOR ANLLELY RUIZ respecto del negocio jurídico en cuestión, se relacionaron a que en su calidad de TESORERA al no ejercer un debido control de las debitaciones de los recursos depositados en la cuenta corriente No 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacífico, toda vez que estos fueron utilizados para el pago de obligaciones surgidas del consumo de tarjetas de crédito obligaciones que no tienen concordancia con la finalidad social que cumple la universidad.

Así las cosas, si los vinculados hubieran cumplido con sus funciones y obligaciones como servidores públicos y gestores fiscales, aplicando mecanismos precisos y acertados sobre el control y seguimiento del gasto, en pro de la debida y celosa administración de los recursos públicos que demanda la gestión fiscal del patrimonio público, no se habría generado el detrimento que este despacho a establecido.

Teniendo en cuenta que la razón jurídica de la responsabilidad fiscal, es la protección del patrimonio público, su finalidad es eminentemente reparatoria o resarcitoria, siendo determinada por un criterio normativo de imputación subjetiva que se estructura con base en el dolo y la culpa grave, partiendo de elementos axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del agente, por lo que quienes cumplen gestión fiscal manejan directamente recursos estatales y les asiste el deber de orientar esos recursos a la realización de las finalidades que le incumben al Estado. Tal criterio se encuentra soportado sobre fundamentos constitucionales y legales, en los cuales se basa la declaratoria de responsabilidad de todo servidor público, tales como los artículos 6, 121, 124 y 209 de la Constitución Política de Colombia; los principios establecidos en las Leyes 1437 de 2011, 42 de 1993, 80 de 1993; los principios consagrados en el Decreto-Ley 111 de 1996, entre otros.

Tanto en el dolo como en la culpa grave, se analizan las funciones del gestor fiscal, si hubo extralimitación u omisión en su ejercicio, los cuales son fundamentos generadores de responsabilidad, el elemento intencional, la negligencia, imprudencia, imprevisibilidad y la falta de experticia, mirados desde la connotación de servidores públicos o colaboradores de la administración, y demás actividades administrativas desplegadas en su actuar, a fin de establecer el carácter subjetivo cualificado que se exige para comprometer la responsabilidad en el proceso fiscal.

Por lo anterior, no es procedente lo manifestado por el apoderado del tercero civilmente, responsable.

Frente a los argumentos **III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURIDICOS DE LA DEFENSA FRENTE A LA VINCULACIÓN DE LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS y A. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.**


La Ley 610 de 2000 en el artículo 44, regula la vinculación de las compañías de seguros a los procesos de responsabilidad fiscal en su calidad de tercero civilmente responsable, como garantía para el resarcimiento del daño al erario.

“Artículo 44. Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado.

*La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella”.*⁸¹

La Corte Constitucional en control de legalidad del artículo anterior se pronunció sobre los alcances de la vinculación de las aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal, en sentencia C-648 de 2002, donde destacó que la misma se delimita por los riesgos que efectivamente se encuentran cubiertos en el contrato de seguro:

“...la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 58 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas”.

Así mismo, en la citada sentencia la H. Corte Constitucional hizo la misma precisión en relación con las demás normas y estipulaciones que rigen el contrato de seguro, tales como la existencia de sumas aseguradas, deducibles, garantías, deberes y cargas del tomador y asegurado, la existencia de coaseguro, etc.

Ahora bien, el Código de Comercio Art. 512 señala que “por el contrato de seguro se transfieren al asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima, quedando este obligado a indemnizar el daño que sufre el asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas”

En relación con la vinculación de las compañías aseguradoras en los procesos de responsabilidad fiscal, la Oficina Jurídica de la CGR en concepto No. 014EE0081593 del 8 de mayo de 2014, refirió:

“7.2. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. COMPAÑÍA ASEGURADORA.

La vinculación de la compañía aseguradora en los términos del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, se hace para proteger el patrimonio público, del daño que puede generar las actividades culposas o gravemente dolosas (sic) en que incurran funcionarios públicos y que generen perjuicios al Estado. Se protegen con ella, entonces, los intereses de la colectividad, superiores al simple interés de los PARTICULARES, gozando de la garantía de un régimen jurídico especial, diverso del aplicable a las relaciones jurídicas privadas.


La Sentencia C-648 de 2002 de la Corte Constitucional expresa sobre la figura del tercero civilmente responsable:

“En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en Calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal; actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. (Subrayado fuera de texto)

Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.”

El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el proceso de responsabilidad fiscal puesto que dispone de los mismos derechos y facultades que asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los argumentos o fundamentos del asegurado como a las decisiones de la autoridad fiscal.”

De acuerdo con el anterior pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Ley ha ofrecido la posibilidad a las contralorías de vincular a las compañías aseguradoras como garantes dentro de los procesos de responsabilidad fiscal. Facultad que tienen dichos Entes de Control y que resulta razonable en función del cumplimiento de los fines del Estado y del desarrollo de los principios de prevalencia del interés general, lo que se concreta al conseguir el resarcimiento

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 59 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

de los perjuicios causados por l las conductas dañinas de funcionarios o de particulares cuando ejercen gestión fiscal.

Corolario de lo anterior, tenemos que la compañía aseguradora es vinculada al proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable y en tal virtud, tiene las mismas acciones que el implicado y por ende una vez, se produzca el siniestro, la aseguradora, puede entrar a pagar hasta el monto asegurado.

Es importante referirnos al contrato de seguro, el cual contiene en general cláusulas condicionales que implican la satisfacción de obligaciones una vez se presenten situaciones previstas en éste.

En el caso de la responsabilidad fiscal y la actuación de la Compañía Aseguradora, como tercero civilmente responsable, tenemos que en los eventos que se determina la existencia del daño se ha configurado el siniestro, esto es, la condición que genera el cumplimiento de la obligación por parte de la aseguradora. Más allá del análisis del grado de la conducta, que es un examen necesario para la responsabilidad fiscal, cuando se presente el siniestro, esto es el daño patrimonial, será procedente el pago por parte de la aseguradora.

En este entendido, si bien, la Compañía Aseguradora, tiene los mismos derechos que el implicado, el tratamiento dentro del proceso de responsabilidad fiscal de uno y otro es diferente. La Compañía Aseguradora es un tercero civilmente responsable, es decir su vinculación está remitida al contrato de seguros.


Así esta Oficina reitera lo señalado en el Concepto Jurídico No. EE62752 de cinco (5) de diciembre de 2006, dirigido a la Contraloría Departamental del Cauca, en el cual señaló:

"Como hemos dicho el garante se vincula en calidad de tercero civilmente responsable. Esto significa, que la aseguradora no es responsable y no requiere evaluarse su conducta, esto es, si obró con culpa grave o dolo, puesto que esta no es determinante en el hecho que ocasiona el daño. Ser tercero civilmente responsable, es precisamente no ser el investigado sino un tercero que es llamado al proceso para que en el evento de presentarse un fallo con responsabilidad fiscal responda patrimonialmente por el daño que ha amparado.

Respecto a las características del contrato de seguro, la sección primera del Consejo de Estado con ponencia de la Honorable Magistrada María Claudia Rojas Lasso, en sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación No. 25000-23-24-000- 2002-00907-01, expresó:

"Otro asunto a tener en cuenta son las características del contrato de seguros, el cual se identifica por ser consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución sucesiva y de carácter indemnizatorio, en cuanto, precisamente, del carácter bilateral y oneroso del contrato de seguros surge la obligación para el asegurador de pagar oportunamente la indemnización cuando a ello haya lugar, pues ella hace parte de los compromisos que la empresa aseguradora adquiere en ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual y de la aceptación de los riesgos que ampara y en desarrollo de un objeto lícito que es propio del giro de sus negocios.

"En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 60 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza.

“Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.

“El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el proceso de responsabilidad fiscal puesto que dispone de los mismos derechos y facultades que asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los argumentos o fundamentos del asegurado como a las decisiones de la autoridad fiscal”^[18]

“Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecida en la norma acusada, además del interés general y de la finalidad social del Estado que representa, constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio margen de configuración legislativa garantizado en estas materias por el artículo 150 de la Carta Política. Atiende los principios de economía procesal y de la función administrativa a que aluden los artículos 29 y 209 de la Constitución. Además, evita un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio público. Así, desde la perspectiva del reparo de constitucionalidad formulado, no hay vulneración de las normas invocadas por los demandantes”.

En el caso que nos ocupa, conforme al Informe técnico No. 2021IE0004285 del 22 de enero de 2021, se estableció que, en atención a los hechos, valores y fechas de pagos, que fundamentan el presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. PRF-2020-00041, se concluyó que la Universidad del Pacífico durante el periodo de diciembre de 2015 a enero de 2016, pago la suma de \$13,030,000 en razón al uso de las tarjetas de créditos Nos. 4913306564897550 y 5587723056453563, sin que existieran soportes que sustentaran la utilización y destinación de dichos recursos.

A través de Auto No. 042 del 06 de febrero de 2020, se vinculó a la compañía aseguradora LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, en razón a la expedición de la póliza No. 3000075 Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial, vigencia desde el 14-07-2015 hasta el 14-07-2016, póliza la cual cuenta con el amparo de 3. *FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, Valor Asegurado \$25,000,000.* Póliza la cual ampara a los funcionarios ENVER MOSQUERA HURTADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.499.840 – Director Administrativo y Financiero, FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.943.241 – Tesorera. Adicionalmente, se observa que la compañía LA PREVISORA S.A, se le comunicó de la vinculación dentro del presente proceso a través de radicado No. 2020EE0016094 del 11 de febrero de 2020.

Expuesto lo anterior, se tiene certeza con respecto a la fecha en la que se generó el daño y la fecha para la cual se encontraba, vigente la póliza No. 3000075, como también sus coberturas y asegurados, adicionalmente, que su vinculación se realizó conforme al artículo 44 de la Ley 610 de 2000, por lo que resulta improcedente lo señalado por el apoderado del tercero civilmente responsable.

Al respecto sobre este asunto, retomamos conclusiones generales de la Sentencia C-338 del 2014:

- La responsabilidad fiscal solo será imputable cuando se haya comprobado la existencia de culpa grave o de dolo.

Tanto la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como del Honorable Consejo de Estado, ha reiterado que la delimitación del riesgo cubierto o excluido en las pólizas de responsabilidad civil, no deben suponer una cláusula abusiva y en todo caso, conforme a la evolución normativa y armonía del ordenamiento jurídico, la **“conducta culposa”** se considera como una conducta con **“posibilidad de asegurarse”**.

La evolución normativa consiste precisamente, en que a partir de la Ley 45 de 1990, se introdujo textualmente la cobertura de la culpa grave y disposiciones en favor de la entidad asegurada o de las víctimas, como las que se citan a continuación:

“Artículo 44. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias:

- 1) Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, a la presente Ley y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva.*
- 2) Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y*
- 3) Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza”.*

“Artículo 79. Prácticas prohibidas. El ofrecimiento reiterado de pólizas o tarifas desconociendo los requisitos de los artículos 45 y 46 de esta ley, la exigencia de formalidades no previstas legalmente para acceder al pago de las indemnizaciones y toda práctica que de manera sistemática tenga como propósito evitar o dilatar injustificadamente el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de seguro, puede dar lugar a la revocación del certificado de autorización para el ramo o los ramos en los cuales se advierta dicha conducta”.

*Artículo 84. Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El artículo 1127 del Código de Comercio, quedará así: “EL seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. **Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave**, con la restricción indicada en el artículo 1055”. (Negritas y subrayas fuera de texto).*

En este sentido la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 5 de julio de 2012, Expediente 0500131030082005-00425-01. M.P. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez, sostuvo: *“luego de la modificación introducida, es claro que en el “seguro de responsabilidad” los riesgos derivados de la “culpa grave” son asegurables, y, por ende, su exclusión debe ser expresa en virtud a la libertad contractual del tomador, ya que de guardarse silencio se entiende cubierto”.*

Cómo ya se ha hecho mención, la póliza No. 3000075, cuenta con el amparo de FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, que con respecto a este amparo en la primera página de la póliza se indica las siguientes **“MANEJO GLOBAL SECTOR ESTATAL (BASICO) OBJETO DEL SEGURO: AMPARAR AL ASEGURADO CONTRA LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES SUFRIDAS EN VIGENCIADELA PRESENTE POLIZA, QUE IMPLIQUEN EL MENOSCABO DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS, CAUSADOS POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE LOS CARGOS AMPARADOS, POR INCURRIR EN CONDUCTAS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE GENEREN FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO**

LA PERDIDA Y LA CONDUCTA QUE LE DIO ORIGEN AL DAÑO TENGA LUGAR DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. RELACION DE CARGOS AMPARADOS: 5. Que una vez se procedió a revisar la relación de cargos amparados se observó que se encuentran amparados los señores ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA. Esta colegiatura al momento de observar el condicionado de la precitada póliza no se observó causal de exclusión alguna aplicable al caso que nos ocupa frente a la asegurabilidad, como también la culpa grave que se les atribuye en el presente proceso a los funcionarios de los cargos amparados, como tampoco observa exclusión aplicable al amparo de FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, Por lo anterior, resulta improcedente lo argumentado por el apoderado del tercero civilmente responsable.

Frente al argumento **B. FALTA DE COBERTURA MATERIAL PARA EL SEÑOR FÉLIX SUÁREZ REYES AL NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS CARGOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA.**

Con respecto a lo manifestado en este argumento por el apoderado del tercero civilmente responsable, esta colegiatura encuentra procedente lo expuesto con respecto a no encontrarse incluido como asegurado el presunto FELIX SUAREZ REYES, sin embargo, ello no significa que el tercero civilmente responsable se exima de responsabilidad, pues tal como este mismo arguye, únicamente los actos de los señores ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA serían cubiertos por la póliza No. 3000075. Por lo que al encontrarse probada la culpa grave atribuible a los señores MOSQUERA HURTADO y RUIZ GARCÍA expuesta en párrafos anteriores y siguientes, la compañía está obligada a pagar hasta su valor asegurable y disponible de la póliza en mención.

Frente al argumento **C. DE ACREDITARSE UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, EN TODO CASO, EL DOLO COMPORTA UN RIESGO INASEGURABLE.**

Con respecto a este argumento de defensa resulta completamente improcedente en razón a las siguientes:

Con radicado No. 2024ER0098217 del 10 de mayo de 2024, se recibió respuesta de la compañía LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, al requerimiento No. 2024EE0085476, allegando los archivos denominados “2_39_65162_3000075” Póliza No. 3000075 y “CD 26149-OK” constancia de disponibilidad presupuestal, adicionalmente, se recibió con los argumentos de defensa ante imputación presentados por el apoderado del tercero civilmente responsable Copia del condicionado general del seguro manejo póliza global sector oficial expedida por LA PREVISORA S.A, en donde se observó la siguiente en el acápite de exclusiones numeral A.

“A. MERMAS O DAÑOS QUE SUFRAN LOS BIENES O VALORES POR CUALQUIER CAUSA NATURAL, SALVO SI SE PROBARE DOLO O CULPA GRAVE DE ALGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYO CARGO SE AMPARA”. Por lo anterior, resulta ineficaz que el apoderado manifieste que la presente póliza no ampara la culpa grave en cabeza de los funcionarios asegurados en la póliza No. 3000075.

Es improcedente, en este caso en concreto, la aplicación del artículo 1055 del Código de Comercio o cualquier estipulación incluso de las mismas pólizas, porque expresamente se incluyó en el condicionado general de la Póliza No. 3000075 amparar la culpa grave si se llagase a probar, como resulta en el presente proceso.

Así las cosas, el amparo de FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, al invocar una supuesta inasegurabilidad de la culpa grave, la aseguradora estaría incumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 44 de la Ley 45 de 1990 y demás disposiciones concordantes.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos expuestos por el apoderado del tercero civilmente responsable.

Frente al argumento **D. EXCLUSIONES EXPRESAS EN LA PÓLIZA 3000075 EXPEDIDA POR LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.**


Frente a este argumento se tiene que una vez revisado el condicionado general de la póliza No. 3000075, NO se observa que en el presente proceso, se encuentre que la conducta desplegada por los señores ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, se encuadre dentro de las causales de exclusión, conductas sobre las cuales ya se ha pronunciado en el presente fallo esta colegiatura y de las cuales incluso se hace mención, pues como se ha indicado se observó la siguiente en el acápite de exclusiones numeral A.

“A. MERMAS O DAÑOS QUE SUFRAN LOS BIENES O VALORES POR CUALQUIER CAUSA NATURAL, SALVO SI SE PROBARE DOLO O CULPA GRAVE DE ALGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYO CARGO SE AMPARA”. Por lo anterior, resulta ineficaz que el apoderado manifieste la aplicabilidad de alguna de las exclusiones pactadas en la precitada póliza, puesto que dichas conductas no encuadran dentro de las exclusiones señaladas, por lo expuesto, dicho argumento expuesto por el apoderado del tercero civilmente responsable no es aceptado por este despacho.

Frente al argumento **E. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.**

Con respecto a este argumento, resulta necesario por parte de esta colegiatura hacer precisión de las siguientes; Con radicado No. 2024ER0098217 del 10 de mayo de 2024, se recibió respuesta de la compañía LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, al requerimiento No. 2024EE0085476, allegando los archivos denominados “2_39_65162_3000075” Póliza No. 3000075 y “CD 26149-OK” constancia de disponibilidad presupuestal de fecha 09 de mayo de 2024, en el cual el tercero civilmente responsable expresó la siguiente:

*“Revisado el sistema se observa que a la fecha La Compañía ha efectuado pagos con cargo de la vigencia anteriormente relacionada por la suma de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$22.500.000)**, razón por la cual hay disponibilidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000)** de valor asegurado, suma a la cual se le debe descontar el valor del deducible pactado contractualmente”*.

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 64 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

Por lo anterior, al momento de realizar la indexación, se deberá precisar que, conforme a lo anterior, la Póliza Manejo No. 3000075 cuenta con una disponibilidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS \$2,500,000. De valor asegurado.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

EL CASO CONCRETO

Como resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, adelantada por la Contraloría Delegada para Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República, por el manejo de recursos públicos destinados específicamente para la educación en la entidad afectada Universidad de Pacífico – UNPA -, se detectaron irregularidades relacionadas con el manejo de la Cuenta Corriente No. 030235501 de Banco de Occidente sobre los consumos en las Tarjetas de crédito Nos. 4913306564897550 y 5587723056453563 a nombre de José Félix Riascos Benavides, consumos respecto de los cuales no se realizó legalización de dichos gastos, como a su vez su relación con el propósito u objetivo misional de la Universidad del Pacífico, configurándose un daño patrimonial al Estado por un valor de **TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS MCTE. (\$13.030.000).**

EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y CUANTIFICACIÓN

En el caso que nos ocupa, se encuentra establecido que se efectuaron pagos debitados automáticamente de la Cuenta Corriente No. 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico – UNPA -, por los consumos de las Tarjetas de crédito empresarial Nos. 4913306564897550 y 5587723056453563 a nombre de José Félix Riascos, pagos que generaron como se ilustrará a continuación un detrimento patrimonial a la – UNPA – por un valor de **TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS MCTE (\$13.030.000)**

Lo anterior fue evidenciado durante la Auditoría practicada a la Universidad del Pacífico –UNPA – con la verificación del reporte de las partidas conciliatorias sobre la Cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente y el Extracto bancario de la citada cuenta con sus movimientos sobre la Tarjetas Nos. 4913306564897550 y 5587723056453563. Adicionalmente fue verificado por la funcionaria designada para rendir el Informe Técnico dentro de la presente investigación.

Igualmente, cabe resaltar que los presuntos responsables señores, FELIX SUAREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, al rendir sus versiones libres sobre los hechos, nunca negaron los pagos recriminados en el Auto No. 042 del 06 de febrero de 2020 y que precisamente dio apertura al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2020-00041; que por el contrario ratificaron los pagos efectuados en las tarjetas Nos. 4913306564897550 y 5587723056453563.

Así mismo, se rindió Informe Técnico decretado por el Despacho y que estaba dirigido a esclarecer la existencia de daño patrimonial y efectivamente se pudo determinar, concluyendo las siguientes:

Que adicionalmente, se realizó Informe Técnico No. 2021IE0004285 del 22 de enero de 2021, emitido por la Profesional Universitaria LUZ YANETH MORENO OCHOA, informe en el cual se concluyó las siguientes:

VIII. CONCLUSION

➤ Los usos y consumos por las Tarjeta de Créditos 4913306564897550 y 558723056453563, en la vigencia 2015 sumaron \$52.902.311,12, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla No. 004				
Resumen de las Compras y Usos de Tarjetas de Crédito				
Cifras en pesos				
RESUMEN DE LAS COMPRAS Y CARGO REALIZADOS POR EL USO DETARJETAS ASIGNADAS A JOSE FÉLIX RIASCO				
CONCEPTOS	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total	% Participación
VIAJES -TRANSPORTE- DESPLAZAMIENTO	17.350.025,15	1.986.560,00	19.336.585,15	36,55%
HOTELES - ALOJAMIENTO - ALQUILER	1.010.000,00	9.168.750,00	10.178.750,00	19,24%
COMBUSTIBLE - GASTOS VEHÍCULO	525.104,00	3.954.887,00	4.479.991,00	8,47%
ÓPTICA	174.001,00		174.001,00	0,33%
RESTAURANTES- ALIMENTACIÓN	1.096.396,00	5.498.281,00	6.594.677,00	12,47%
OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	913.328,00	10.517.514,00	11.430.842,00	21,61%
GMF 4 X MIL CONSUMOS	84.275,40	124.667,22	208.942,62	0,39%
INTERESES CORRIENTES	116.915,03	379.044,50	495.959,53	0,94%
INTERESES DE MORA	631,70	1.931,12	2.562,82	0,00%
TOTAL	21.270.676,28	31.631.634,84	52.902.311,12	100,00%
Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563– Análisis CGR				

El rubro con mayor representatividad corresponde a servicio de viajes transporte y desplazamiento, por los cuales se contrajeron obligaciones por \$19.336.585,15 por viajes aéreos realizados; la equivalencia de estos gastos corresponde al 36,55% del total de las compras.

Por otras compras y servicios se adquirieron obligaciones por \$11.604.843 equivalentes al 21,93%; las compras fueron realizadas en almacenes de cadena en su mayoría. Por servicios de hotelería, alojamiento y alquiler se adquirieron obligaciones por \$10.178.750 que representan el 19,24%; los servicios por este concepto fueron adquiridos en hoteles ubicados en los municipios de Buenaventura, Cali y Guapi.

Los gastos por consumos en restaurantes por \$6.594.677, representan el 12.47% del total de las compras realizadas. El consumo de combustible y gastos de vehículo generaron compromisos por \$4.479.991, representando el 8.47% del del uso de las tarjetas de crédito.

El 1,34% de los consumos que sumaron \$707.464,97, corresponden a los gastos incurridos por el pago de intereses e impuesto al gravamen (4x1000).

➤ La Universidad del Pacífico pagó \$52.619.815,50 por concepto de consumo y cargos de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 558723056453563, otorgada por el Banco de Occidente, seccional Buenaventura, a la Universidad del Pacífico en la vigencia 2015.

Tabla No. 005
Resumen Pagos Totales por TC 4913306564897550 – 5587723056453563

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, POR EL USO DETARJETAS DE CREDITOS ASIGNADAS A JOSE FELIX RIASCO BENAVIDES			
FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
29/07/2015	3.470.000		3.470.000
20/11/2015	5.270.000		5.270.000
25/11/2015	8.453.000		8.453.000
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
29/07/2015		700.000,00	700.000
24/09/2015		3.270.000,00	3.270.000
15/10/2015		6.685.531,46	6.685.531
13/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/11/2015		5.870.642,02	5.870.642
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000
5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$ 20.988.000,00	\$31.631.815,50	\$52.619.815,50

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR

En atención a los hechos, valores y fechas de pagos, que fundamentan los hechos del reproche fiscal dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF2020-00041, se concluye que la Universidad del Pacífico durante el periodo diciembre 2015 – enero de 2016, canceló \$13.030.000 por el uso de las tarjetas de crédito 4913306564897550 y 5587723056453563 y sobre los cuales el UNPA, no aporó documentos sobre la legalización de los gastos.

Tabla No. 006
Pagos de las Tarjetas de Créditos dentro del PRF-2020-00038

RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS, DETERMINADOS DENTRO EL PRF 2020-00038			
FECHAS DE PAGO	TC 491330-6-564897-550	TC 558772-3-056453-563	Total
24/12/2015	2.850.000		2.850.000
5/01/2016	945.000		945.000
24/12/2015		9.000.000,00	9.000.000
5/01/2016		235.000,00	235.000
TOTAL	\$3.795.000	\$9.235.000	\$13.030.000

Fuente: Extractos bancario de las tarjetas de crédito 491330-6-564897-550 y 558772-3-056453-563 y la cta cte 030-23550-1 – Análisis CGR

- La falta de legalización de los gastos, genera:
- Que los registros de los hechos económicos derivados por el uso de las Tarjetas, no se efectuarán conforme a la normatividad presupuestal, contable y tributaria vigente en el 2015.
 - Incertidumbre relacionada con el propósito de los gastos, toda vez que no se tiene la certeza, si las tarjetas de créditos, fueron utilizadas para el cumplimiento de un propósito u objetivo institucional.

Sumado a lo anterior, se tiene dentro del presente proceso que la Universidad del Pacifico, nunca autorizó Asignación de gastos de representación al rector por medio de tarjetas de crédito durante la vigencia 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 conforme a certificación emitida por el secretario general, Harold Enrique Cogollo Leones de fecha 08 de septiembre de 2021.

Lo anterior, generando un detrimento patrimonial a la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – UNPA – por un valor de **TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS MCTE (\$13.030.000)** Sin indexar.

El daño es uno de los conceptos más elaborados y trabajados de la doctrina perteneciente a la responsabilidad contractual y extracontractual, motivo por el cual, son múltiples los autores que lo han querido abordar, con el objeto de determinar su límite y extensión.

Así tenemos como el doctor Tamayo lo define como “...el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extramatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima” 134; mientras que el profesor De Cupis señala que el daño no es más que un “...perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”135. Por su parte, el doctor Henao lo identifica como “...la aminoración patrimonial de la víctima”136, y el tratadista Escobar Gil, lo determina como “...todo detrimento, menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un acontecimiento determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, corporales o patrimoniales, sin importar que la causa sea un hecho humano, inferido por la propia víctima o por un tercero, o que la causa sea un hecho de la naturaleza”137.

De esta forma tenemos que, a pesar de la pluralidad de definiciones, todas ellas conservan unos elementos comunes los cuales se refieren al detrimento sufrido por el patrimonio de la víctima, como consecuencia de una acción u omisión ilícita generada por un tercero independiente a la víctima. Así pues, podemos señalar que el daño es el menoscabo o detrimento producido al patrimonio de la persona natural o jurídica o, a la persona en su ser mismo ya sea patrimonial o físico o, moral o extrapatrimonial, por parte de un tercero, producto de una conducta ilícita.

Si bien existe una homogeneidad respecto al concepto del daño, no cabe duda que éste en materia fiscal contempla unos elementos especiales que lo diferencian del daño en materia penal o civil.

Así, se requiere de un sujeto cualificado para su producción, ya que debe ser causado por un gestor fiscal (o un agente que “contribuya” “con ocasión” de la gestión fiscal al detrimento del erario de acuerdo a su “conexidad próxima y necesaria”). Así mismo, la acción dañosa, debe recaer única y exclusivamente sobre los bienes del Estado, escapando a su examen el menoscabo que sufran otros recursos que no sean los públicos.

De lo anterior, se sigue que el sujeto pasivo del daño sea el Estado, concebido este como persona jurídica en cuanto sujeto de derechos y obligaciones, respecto del cual y por esa condición, sólo es posible indemnizar el daño patrimonial o físico, y no el extrapatrimonial o moral¹³⁸.

En suma, podemos decir que el daño en los PRF, está referido al menoscabo, detrimento o perjuicio que sufre el patrimonio del Estado por causa de la acción u omisión de un gestor fiscal, o de la persona que determine dicho detrimento.

El daño tiene como características, la de ser cierto, esto es, que sea objetivamente verificable, en relación inversamente proporcional con el denominado daño eventual, el cual no es indemnizable; que sea especial, en relación con su origen; anormal, al no tomar en cuenta el desgaste natural de las cosas producto del paso del tiempo, y cuantificable por valorar económicamente el costo del perjuicio.

De la misma forma, la Doctrina ha sido reiterativa en considerar el daño como el primer elemento de la responsabilidad fiscal. Sólo después de estructurado y probado el daño se puede establecer los demás elementos, empezando por la conducta.

Al respecto, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en concepto 0070A del 15 de enero de 2001, señaló sobre el daño:

“De los tres elementos anteriores, el daño es el elemento más importante. A partir de éste se inicia la responsabilidad fiscal. Si no hay daño no puede existir responsabilidad. Con esta lógica, el artículo 40 de la ley 610 dispone que el proceso de responsabilidad fiscal se apertura cuando se encuentra establecida la existencia del daño, es decir, se requiere que exista certeza sobre la existencia de éste para poder iniciar el proceso de responsabilidad fiscal...” (Subrayado fuera de texto).

En concepto EE9273 del 14 de febrero de 2006 la Oficina Jurídica de la Contraloría sostuvo respecto al daño al patrimonio del Estado:

“Así mismo vemos que, la existencia del daño es condición de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, tal como consta en los artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000 transcritos, de lo contrario, procederá el adelantamiento de una indagación preliminar por el término de seis (6) meses”.


Allí mismo se afirma:

“Con base en la normatividad antes descrita la Oficina Jurídica realizó un estudio sobre el daño patrimonial al Estado, proferido mediante el oficio 0070A de 15 de enero de 2001, en el cual citaremos algunos aspectos relativos al objeto de su consulta, a saber: “IV. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. (...) 2. Certeza del daño. Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto. Se entiende que «el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante”. (Subrayado fuera de texto).

Siendo también importante mencionar del concepto al que hacemos referencia que:

“De otra parte, vale la pena citar la Sentencia SU-620, 13 de noviembre de 1996, Expediente T-84714, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonel, en la cual la Honorable Corte Constitucional, precisó: “Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio”. (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, puede señalarse que, aunque el daño en material fiscal sigue en principio los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales establecidos para el daño en general, tiene unos elementos exclusivos que lo separan de éste y lo diferencia de otras clases de daño. Es además la nota primaria y fundamental para establecer la existencia o inexistencia de la Responsabilidad Fiscal, ya que, sin la producción

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 69 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

del mismo, no tiene razón de ser la Acción Fiscal, en tanto que esta es resarcitoria al perseguir la compensación del daño causado al Estado por parte del gestor fiscal.

INDEXACIÓN

Establecido el daño patrimonial al Estado, procede el Despacho a dar cumplimiento al artículo 53 de la Ley 610 de 2000, que a la letra señala: *“Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos correspondientes”*:

Se debe tenerse en cuenta que la indemnización ha de ser íntegra, o lo que es lo mismo, el daño debe repararse plenamente, con el objeto de tratar de recomponer los recursos fiscales que han sido sustancia del detrimento, lo cual supone que los dineros que deban ser repuestos al erario deban ser indexados con el fin de que el resarcimiento sea integral.


Esto ya que al Estado no se le puede imponer como castigo la pérdida del valor constante del dinero por el paso del tiempo, siendo éste la víctima del daño causado a sus recursos, ni tampoco puede enriquecerse sin justa causa persiguiendo réditos distintos a los sufridos por el daño que se le ha producido, más si se tiene en cuenta que la naturaleza del proceso fiscal es resarcitoria y no sancionatoria¹⁴¹, por lo cual, no se puede buscar por medio del proceso fiscal el cobro de sanciones como pretexto para la indemnización de los perjuicios causados. Debe entonces resarcirse dicho perjuicio con el valor del capital afectado más la indexación del mismo, con el fin de que pueda determinarse una reparación integral del daño a los recursos públicos.

Sobre el tema de la indemnización plena la doctrina ha señalado que:

“La enunciación de la presente regla es simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño”, o, en palabras de la Corte constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite”. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento”¹⁴².

Ahora bien, la indexación ha sido definida por la doctrina como un sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.

El Consejo de Estado¹⁴³, define la indexación de las obligaciones como una figura que nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de tal manera que, en aplicación de principios, tales como, el de equidad

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 70 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos.

Por otra parte, la ley 610 de 2000¹⁴⁴, declara la obligación de resarcir los daños de forma indexada, efecto que ha sido extendido a la cesación y archivo del PRF, según criterio del Consejo de Estado, al señalar que:

“...el resarcimiento del perjuicio supone la configuración de la responsabilidad, de manera que la procedencia del auto de archivo a que se refiere el artículo 47, cuando se acredita el resarcimiento pleno del perjuicio, implica necesariamente que se ha producido un fallo con responsabilidad fiscal y por ello el artículo 53 de la ley 610 impone la obligación al funcionario competente de determinar en él, en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizado a valor presente al momento de la decisión, según los índices del precio al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes”¹⁴⁵

Por su parte, el final del artículo 53 de la ley 610 de 2000 dispone que:

“...Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes”.

Situación que ha sido corroborada por la Corte constitucional que al respecto ha señalado:

“El objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, esa reparación debe enmendar integralmente los perjuicios que se hayan causado, esto es: incorporando el daño emergente, el lucro cesante y la indexación que da lugar el deterioro del valor adquisitivo de la moneda. En materia de responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”¹⁴⁶.

Así mismo en la sentencia C-382 de 2008 cuyo Magistrado Ponente fue el doctor RODRIGO ESCOBAR GIL, sobre este tópico la Corte manifestó:

“Cabe precisar sin embargo que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado más no puede superar ese límite.”. Y no podría ser de otra manera, ya que, en caso de ordenar una indemnización superior al monto total del daño, generaría un enriquecimiento sin causa. La indemnización por los daños materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que incluya el valor del bien perdido o lesionado (daño emergente), y el monto de lo que se ha dejado de percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante), a lo cual se suma la indexación correspondiente, que, para el caso de la responsabilidad fiscal, se halla prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la ley 610 de 2000. Tal indemnización no puede incluir otros factores que desborden el carácter indemnizatorio de la sanción”

Así las cosas, es claro para este Despacho que las sumas para que se tengan como total e íntegramente restituidas deben contener la indexación de las mismas, que para el caso en concreto debe ser contabilizadas a partir del momento en que salieron del Estado hasta el momento en que estos se restituyeron o a la fecha del fallo, para lo cual se tomará la fórmula que de antaño ha utilizado el Consejo de Estado para determinar la indexación y que se transcribe a continuación:

$$R = Rh * \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$$

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico del daño investigado (Rh), por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria del pago) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Para el presente caso se indexa cada uno de los valores pagados por la Universidad del pacifico por concepto de consumos de las tarjetas de crédito materia de reproche fiscal y que hacen parte del detrimento establecido de la siguiente forma:

Tarjeta de credito	Fecha Pago tarjeta de credito	Fecha a actualizar	VALOR A ACTUALIZAR	ÍNDICE DANE		VALOR INDEXADO
				Fecha Hechos IPC In (B)	Fecha Final IPC Fi (C)	
			VH (A)			VP={VH*(IPC Fi/IPC In)} (E) = {A*(C/B)}
4.913.306.564.897.550	24-dic.-2015	2-oct.-2024	\$ 2.850.000,00	88,05	143,67	4.650.306,64
4.913.306.564.897.550	5-ene.-2016	2-oct.-2024	\$ 945.000,00	89,19	143,67	1.522.235,12
5.587.723.056.453.560	24-dic.-2015	2-oct.-2024	\$ 9.000.000,00	88,05	143,67	14.685.178,88
5.587.723.056.453.560	5-ene.-2016	2-oct.-2024	\$ 235.000,00	89,19	143,67	378.545,24
TOTALES			\$ 13.030.000,00			21.236.265,88

Al aplicar la fórmula anterior e indexar el daño patrimonial avaluado en \$13.030.000, el valor del detrimento patrimonial se establece en **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$21.236.265,88)¹** a la fecha.

DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL

DE LA GESTIÓN FISCAL Y LA CONDUCTA:

Una vez establecido lo relativo al daño, es momento para seguir con el examen propuesto en la ley 610 de 2000, con el objeto de establecer si hay lugar para deducir responsabilidad fiscal respecto de los vinculados a esta actuación, para lo cual se analizará la conducta de los mismos, previo análisis del concepto de culpa en materia fiscal.

Al referirnos a la conducta, ineludiblemente hacemos referencia a las acciones atribuidas a las personas naturales de carácter público o, las jurídicas o naturales del régimen privado, que tengan a cargo el desarrollo de la gestión fiscal, entendida esta, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000.²

¹ Actualizado de acuerdo al IPC de agosto de 2024

² “Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia,

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles• Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

No obstante, lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, las personas que “*con ocasión*” de la gestión fiscal ocasionen un detrimento patrimonial al Estado, también son objeto del reproche fiscal. Dicha expresión ha sido interpretada por la Corte Constitucional en la Sentencia 840 de 2001 M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA, como los actos que “*...comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal...*”

En consecuencia, la conducta que interesa examinar a la hora de determinar la existencia o no de la Responsabilidad Fiscal, es aquella realizada por una persona natural o jurídica, pública o privada, a título de **culpa grave o de dolo** y que tenga el dominio de la gestión fiscal o tenga una conexidad próxima y necesaria con ella.

Ahora bien, y como se ha mencionado anteriormente, la conducta sobre la que se califica el daño es la gravemente culposa o la dolosa cometida por el agente que realice gestión fiscal³ Respecto a la culpa grave, y de acuerdo con la decisión adoptada por la Corte Constitucional, debe remitirse a lo establecido en la ley civil.

La primera define la culpa grave como aquella que: “*consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios*”.⁴

La doctrina especializada en el tema de la responsabilidad fiscal ha señalado que existe culpa fiscal, es decir culpa grave, cuando el agente, actúa en contravía de los principios de la gestión fiscal⁵, o de los principios de la función pública⁶, al exponer lo siguiente:

*“En tal sentido hemos considerado que en lo relativo a la determinación de la responsabilidad fiscal, la culpa se concreta en la violación de tales principios o en la violación de los principios rectores de la responsabilidad administrativa, considerando además que los encargados de tal gestión tienen la carga probatoria de acreditar la diligencia y cuidado en el desarrollo de la misma”.*⁷

Igualmente, se ha indicado al respecto que, no basta con la simple violación de los Principios Constitucionales, de la gestión fiscal y de la función administrativa, ya que además debe verificarse el incumplimiento de un deber legal directo, al señalar que:

*“La culpa fiscal implicará siempre la violación de los principios de gestión fiscal, pero la determinación de la misma exigirá siempre, identificar una norma imperativa que imponga un deber de conducta al gestor fiscal, norma cuyo incumplimiento permitirá determinar con certeza la existencia de culpa fiscal”*⁸.

Por lo anterior, resulta claro para este Despacho, que la culpa en materia de responsabilidad fiscal plantea dos asuntos, por un lado la determinación del incumplimiento de un deber objetivo (establecido en la ley) por parte del agente

economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.”

³ Sentencia C-619 de 2002, proferida por la corte constitucional la cual declaro la inexequibilidad de la culpa leve como base de la Responsabilidad Fiscal.

⁴ Artículo 63 del Código civil.

⁵ El Inciso 3 del artículo 267 de la Constitución Nacional, señala como principio de la Gestión Fiscal la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales

⁶ Artículo 209 de la Constitución Política, desarrollados por el Artículo 3 del CCA

⁷ RODRIGO NARANJO, Carlos Ariel, y CÁRDENAS, Erick. Procesos de Responsabilidad de Competencia de las Contralorías, serie borradores de investigación, Universidad del Rosario, Bogotá, 2002. Págs. 48 y 49.

⁸ RODRIGO NARANJO, Carlos Ariel; CÁRDENAS, Erick y NARANJO GÁLVEZ, Rodrigo. Cuatro Tesis Sobre Responsabilidad Fiscal-El Concepto de Culpa en la Responsabilidad Fiscal. Revista Sínderesis No. 7. Ed. Auditoría General de la República. Págs. 25-26.

fiscal, según lo dispuesto en los artículos 6, 90 y 123 de la Constitución Política, los cuales prescriben la responsabilidad de los funcionarios públicos, estudio que además debe realizarse bajo el criterio principalista dispuesto en la Norma Superior en los artículos 209 y 267, respecto de los principios fiscales y de la función pública. Por otra parte, supone el examen del contenido volitivo decantado en el gestor fiscal, el cual está condicionado tanto por la estructura y conocimientos que este posee, como por la exteriorización de su comportamiento.

Ahora bien, en lo que respecta al dolo, este ha sido entendido como la intención positiva de infligir un daño.

Así las cosas, tenemos que a la hora de probar la culpa grave en el proceso de responsabilidad fiscal debemos identificar la norma (entendida esta en el sentido lato) desatendida por el sujeto pasivo del proceso fiscal, como primera medida, para posteriormente realizar una valoración respecto del grado de intensidad que implica tal inobservancia a fin de establecer si esta vulnera la atención que un hombre de cuidado debe de tener en sus propios negocios como medida comparativa.

Por otro lado, la prueba del dolo se encuentra condicionada al establecimiento de la existencia del elemento volitivo, o intencional obrante en el individuo causante del daño, y del elemento cognitivo o de conocimiento de la ilicitud de su obrar, para que proceda la calificación de la conducta del presunto responsable fiscal a título de dolo.

DEL NEXO CAUSAL

El artículo 5° de la Ley 610 de 2000, dispone que el daño, la conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal, son requisitos necesarios, para deducir la responsabilidad fiscal respecto a una persona natural, o jurídica, de origen privado, que ejerza funciones de gestión fiscal.

Sobre el nexo causal se ha dicho que este “...consiste en la imputación de un resultado a la conducta o acción humana bien sea con fundamento en factor subjetivo de atribución (culpa o dolo) o con base en el riesgo.”⁹

Tenemos, entonces, que este se refiere a la relación causal que se predica entre la conducta y el daño, la cual puede ser, no solo de origen fáctico, sino que también puede darse en el plano jurídico. Esto en la medida que la producción de un resultado no sólo se determina mediante la realización de una acción positiva en el mundo exterior, sino que también puede ser producto de una manifestación intelectual que proyecta sus resultados mediante la modificación del mundo sensible.

Así mismo, la causa de un resultado no solo es atribuible al ejercicio de una acción positiva o intelectual, sino que también puede producirse por la omisión de una atribución jurídica por parte del obligado de la misma, la cual trae como consecuencia la producción del resultado lesivo del daño.

El nexo causal, a lo largo de su desarrollo dogmático y jurisprudencial, ha tratado de ser explicado a través de diferentes teorías dentro de las cuales se cuenta como las más influyentes: i) la teoría de la equivalencia de las condiciones¹⁰; ii) la teoría

⁹ Parra Gúzman, M. F. (2010). *Responsabilidad civil*. Bogotá D.C.: Ed. Ediciones Doctrina y Ley. p. 156

¹⁰ “Según esa teoría, todo los elementos que han condicionado el daño son equivalentes (Corte de Casación. 1° Sala Civil, 2 de Julio de 2002, Bull. Civ. I, N° 182). Faltando cualquiera de ellos, el daño no se habría producido. Por lo tanto, si todos son condiciones del daño, todos son causa del mismo. La causa es, entonces,

Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

de la causa próxima; iii) la teoría de la causalidad adecuada¹¹ y iv) la teoría de la imputación objetiva, siendo la más aplicada en la actualidad, para los casos de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la teoría de la causalidad adecuada.

Esta última teoría, al igual que la equivalencia de las condiciones, toma en cuenta todas las condiciones que pudieron originar el daño, para luego mediante la aplicación de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, así como la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, establecer de manera argumentada, cuál de todas estas, resulta la más adecuada para la producción del daño¹⁵⁷.

No obstante, en la medida que los resultados provenientes de la omisión no pueden ser explicados por la inacción, ya que la transformación física no puede provenir de una no acción pura¹², debe predicarse, en estos casos, que la relación entre la conducta y el daño, se da por medio de la imputación o atribución jurídica de un resultado y no mediante el examen del hecho físico productor del resultado, ya que en este caso no existe una acción física.

Así, en todo caso, ya sea producto de una acción o de una omisión, debe establecerse que la misma es el origen del daño, ya como condición adecuada o como imputación de la omisión, para poderse deducir responsabilidad fiscal respecto al presunto responsable, siendo imposible fallar en contra de este cuando tal elemento carezca de demostración.


SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL RESPECTO DE LOS IMPLICADOS EN ESTA ACTUACIÓN

Presentado el marco dogmático de estos temas dentro del proceso de responsabilidad, procede el Despacho a analizar la conducta desplegada por parte de los implicados en esta actuación y el nexo causal establecido entre sus actuaciones u omisiones y el daño producido.

toda condición sine qua non: eliminada la causa, la consecuencia desaparece” (le Tourneau, P. (2004). La responsabilidad civil. (J. Tamayo Jaramillo, Trad.) Bogotá D.C.: Legis. p. 79).

¹¹ “... , hay causalidad adecuada cuando una condición es por naturaleza, en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida, capaz de producir el efecto que se ha realizado.” (Ibídem, 82).

¹² Sobre este asunto puede verse la Sentencia del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2015, en la cual se señala al respecto lo siguiente: “Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente natural u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, MIR PUIG y JESCHECK, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)” (énfasis en el texto original), sostiene aquél; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (“ex nihilo nihil fit)”, afirma éste. Cfr. Oriol Mir Puigpelat, cit., pp. 241-242. Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el Juez de lo Contencioso Administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño—, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; C. P. Dra.: Marta Nubia Velásquez Rico; proferida el 19 de noviembre de 2015; Radicación Número: 25000-23-26-000-2003-01435-02(33967).


 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 75 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

El señor **FELIX SUAREZ REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.485.434, Rector en propiedad de la Institución educativa superior conforme a la Resolución No. 09 del 23 de diciembre de 2015, periodo comprendido entre el 23 de diciembre del 2015 al 19 de febrero de 2016.

Para el presente caso está probado que el señor FELIX SUAREZ REYES realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, inoportuna y omisiva como ordenador del gasto y también al no cumplir con las obligaciones establecidas en el Manual de funciones en los numerales, 13, 20, 21 y 27, los cuales establecen “Velar por la preservación y acrecentamiento del patrimonial material, económico, cultural y artístico de la Universidad”, “Desarrollar la misión, principios y objetivos de la Universidad del pacífico, consagrados en el estatuto general”; “Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.” y “Dirigir todo lo relacionado con la conservación y la administración del patrimonio de la Universidad del Pacífico”, ya que con los pagos de tarjetas de crédito a cargo de rectores mediante debitación automática de la Cuenta corriente de titularidad de la Universidad, en la cual se administran recursos que tienen como finalidad la prestación del servicio educativo, se afectó el cumplimiento misional de la Entidad, teniendo en cuenta que no existen soportes que determinen que los pagos tenían relación de causalidad con labores institucionales y misionales del Ente universitario.

Obsérvese que el señor FELIX SUAREZ REYES, en su calidad de Rector, para la época de los hechos, de la Universidad del Pacífico – UNPA, además de lo anteriormente anotado, realizó su defensa a partir de los artículos 22, 16 y 47 de la Ley 610 del 2000, aduciendo que este mismo, mes a mes en su calidad de Rector presentaba informes (11) los cuales fueron avalados en sesiones del Consejo Superior Universitario, como máximo órgano de la Universidad del Pacífico, refiere que para brindar más claridad anexa los informes de gestión presentados al Consejo Superior Universitario, desde mayo 2 de 2017 hasta el 26 de octubre de 2018, donde aduce el presunto que se demuestra cada una de las actividades realizadas durante dicho periodo de tiempo, Se debe precisar, que al momento de valorar dicha documentación aportada por el señor SUAREZ REYES se evidencia que los mismos informes con los cuales pretende soportar o justificar el gasto ocasionado producto del daño del presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, corresponden a gastos distintos de los que se investigan dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2020-00041, por otra parte, los informes de gestión aportados por el presunto corresponden a los años 2017 y 2018 y como es claro dentro del Proceso, conforme al Hallazgo 72425 de Auditoria integral practicada a los recursos asignados al UNPA y el Auto de Apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 042 del 06 de febrero de 2020, el daño se encuentra ocasionado por los pagos debitados automáticamente de la cuenta No. 030235501, realizados mediante las Tarjetas de Crédito Empresarial No. 4913306564897550 de la cual se realizaron pagos por la suma de \$3.795.000 TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO durante las vigencias 24/12/2015 al 05/01/2016, Tarjeta de Crédito Empresarial No. 5587723056453563 de la cual se realizaron pagos por la suma de \$9.235.000 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO durante las vigencias 24/12/2015 al 05/01/2016. Para una suma total del daño de \$13.030.000 TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE.

Por otra parte, y con relación a lo manifestado por el vinculado no se evidencia soportes de los gastos mencionados anteriormente, como tampoco dentro de los anexos aportados por el presunto brilla la ausencia de informes de gestión de las vigencias 2015 y 2016. Por otra parte, de acuerdo al acervo probatorio es necesario poner de presente que estos gastos claramente se hacen en el periodo en el cual el señor SUAREZ REYES, era Rector de la Universidad, por lo que era responsable

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 76 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

de estos gastos sea que los hiciera él o no, teniendo en cuenta sus funciones, pues debió exigir la devolución de las tarjetas o la cancelación por un lado y por otro exigir la devolución de los gastos incurridos al anterior Rector o si fueron hechos por él aportar los soportes que evidenciaran que se trataban de gastos que tenían relación de causalidad con labores institucionales y misionales de la Universidad, lo anterior en el ámbito de sus funciones y competencias, de lo cual no existe ninguna prueba o evidencia que se haya realizado, No existe evidencia o soporte probatorio alguno que demuestre que el entonces Rector haya realizado algún trámite administrativo o legal en aras de recuperar esos pagos realizados sin soportes durante su mandato como Rector de la Universidad del Pacífico, lo que a la postre generó la pérdida de los cuestionados recursos de educación.

Por lo aquí expuesto, la conducta del señor FELIX SUAREZ REYES, como Rector de la Universidad del Pacífico –UNPA –, para la época de los hechos, en calidad de Gestor Fiscal de los recursos de educación adjudicados a la Universidad del Pacífico, se debe calificar como gravemente culposa, toda vez que el daño causado al Patrimonio Público fue consecuencia directa de su conducta, como así lo establece el artículo 6 de la Ley 678 de 2001: La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, teniendo en cuenta su cargo y el incumplimiento de las obligaciones que tenía funcionalmente respecto al adecuado manejo y uso de los recursos públicos puestos a su disposición para gestión a través de las tarjetas de crédito, realizándose pagos sin que existan soportes sobre su adecuado uso durante su gestión como Rector de la Universidad.

El señor, **ENVER MOSQUERA HURTADO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.499.840 en calidad de Director Administrativo y financiero nombramiento conforme a la Resolución No. 231 del 27 de marzo de 2015. Realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, inoportuna y omisiva al no cumplir cabalmente con lo establecido en el Manual de funciones en los numerales 2 y 3 “Dirigir, coordinar y controlar la administración de los recursos financieros y humanos de la Universidad” y “Dirigir, controlar y coordinar actividades presupuestales y financieras de la institución de conformidad con las disposiciones sobre la materia”, ya que con la realización de los pagos de tarjetas de crédito a cargo de rectores mediante debitación automática de la Cuenta corriente de titularidad de la Universidad, en la cual se administran recursos que tienen como finalidad la prestación del servicio educativo, se afectaron los recursos para el cumplimiento misional de la Universidad, teniendo en cuenta que no se soportaron los gastos efectuados por el señor FELIX SUAREZ REYES, que determinen el adecuado manejo de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el material probatorio, en especial el Informe técnico o en su defecto la devolución de los recursos.

En su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO no ejerció un adecuado seguimiento y control de la destinación de los recursos depositados en la Cuenta corriente No. 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico, toda vez que estos recursos fueron utilizados para el pago de obligaciones surgidas del consumo de tarjetas de crédito que no están debidamente soportadas y que no permite establecer el adecuado manejo.

No se puede pasar por alto, al margen de que el Ex-Director Administrativo y Financiero ENVER MOSQUERA HURTADO, era conocedor de sus obligaciones, lo cuestionable y que conlleva a establecer una Responsabilidad Fiscal es la


inobservancia, omisión, falta de control y seguimiento al uso y manejo de las Tarjetas de crédito, cuyos consumos carecen de los debidos soportes reales y verídicos que dieran cuenta de una gestión misional del Rector, encontrándose dichos pagos desprovistos de los reclamados soportes para que con ellos se pudieran obtener un debido control y gestión fiscal, falencias de las que da cuenta el Informe Técnico llegado al plenario por la Contraloría General de la República. Por otra parte, tampoco es de recibo decir que él no tenía control sobre los gastos del Rector pues dentro de sus funciones está precisamente velar por el adecuado uso de los recursos de la Universidad, por lo que aun siendo gastos que se debitaban automáticamente era su deber exigir los soportes de los gastos que dieran cuenta que se trataban de temas institucionales, por lo que en ese sentido era responsable sobre el adecuado manejo de las tarjetas de crédito.

Por otra parte, el señor ENVER MOSQUERA HURTADO, en su calidad de Ex Director Administrativo y Financiero de la Universidad del Pacífico – UNPA – esgrimió sus fundamentos de defensa manifestando que el manejo de las tarjetas de crédito estaban en cabeza exclusivamente del señor Rector, las cuales se encontraban dentro del rubro denominado “Gastos de Representación” con el cual el señor Rector, cubría gastos como, alojamiento, alimentación, transporte y otros, refiere también que su función en ese caso específico correspondía en conciliar las cuentas por pagar, revisar que existiera el previo CDP y RP. Manifestaciones que resultan contradictorias de acuerdo a sus funciones esenciales consagradas en el Manual específico de funciones y competencias lo anterior en razón a que dentro de sus funciones se encuentran “Dirigir, coordinar y controlar la administración de los recursos financieros y humanos de la Universidad”, “Dirigir, controlar y coordinar las actividades presupuestales y financieras de la institución de conformidad con las disposiciones sobre la materia” Por lo anterior y en razón al daño que se produjo se evidencia omisión por parte de sus funciones esenciales como Director Administrativo Financiero al momento de los hechos.

Así las cosas, no cabe duda que el señor ENVER MOSQUERA HURTADO, exfuncionario de la Universidad del Pacífico – UNPA -, era responsable de la recta administración y salvaguarda de los recursos públicos destinados para el ente educativo, faltando a la correcta fiscalización, contabilización y registro de los recursos de la Cuenta asociada de las Tarjetas crédito, con inobservancia de sus funciones como servidor público.

Por lo aquí expuesto, la conducta del señor ENVER MOSQUERA HURTADO, como Ex Director Administrativo y Financiero de la Universidad del Pacífico, se le debe calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al Patrimonio Público fue consecuencia del incumplimiento de sus funciones y deberes, teniendo en cuenta que no existen soportes que acrediten un adecuado manejo de los recursos y tampoco existen soportes de un adecuado control y seguimiento a los gastos efectuados con las tarjetas de crédito, durante la época de los hechos, como así lo establece el artículo 6 de la Ley 678 de 2001: La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

La señora, **FLOR ANLELY RUIZ GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía 66.943.241, en calidad de Tesorera, nombramiento en (ENCARGO) de conformidad a la Resolución No 2040 del 5 de mayo de 2015, Resolución No 310 del 16 de julio de 2015, Resolución No 317 del 21 de julio de 2015, Resolución No 002 del 2 de enero de 2016, periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2015 hasta el 23 de marzo de 2016, realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 78 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

al no cumplir cabalmente con los establecido en el Manual de funciones en el numeral 3 “Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las gestiones financieras con los bancos, corporaciones, firmas y comisionistas, para el manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad” ya que con la realización de los pagos de tarjetas de crédito a cargo de rectores mediante debitación automática de la cuenta corriente de titularidad de la Universidad en la cual se administran recursos que tienen como finalidad la prestación del servicio educativo, se afectaron los recursos para el cumplimiento misional de la Universidad.

Las actuaciones de la señora FLOR ANLLELY RUIZ se relacionan en que en su calidad de TESORERA no ejerció un debido control y seguimiento de las debitaciones de los recursos depositados en la Cuenta corriente No. 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico, toda vez que estos fueron utilizados para el pago de obligaciones surgidas del consumo de tarjetas de crédito, obligaciones que no tienen concordancia con la finalidad social que cumple la Universidad, brillando por su ausencia el control y seguimiento a la Cuenta 030235501 del Banco de Occidente, por cuanto, como está probado en plenario, se realizaron pagos a través de tarjetas de crédito sin que existan soportes que los justificaran, estando a su cargo el control para el manejo eficiente de los recursos financieros de la Entidad, lo que demuestra incumplimiento de sus funciones.

Por lo aquí expuesto, la conducta de la señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, como Tesorera de la Universidad del Pacífico, se le debe calificar como gravemente culposa, toda vez que el daño causado al Patrimonio Público fue consecuencia del incumplimiento de sus funciones y deberes, teniendo en cuenta que no existen soportes que acrediten un adecuado manejo de los recursos y tampoco existen soportes de un adecuado control y seguimiento a los gastos efectuados con las tarjetas de crédito, durante la época de los hechos, como así lo establece el artículo 6 de la Ley 678 de 2001: La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

La señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, en su calidad de Tesorera de la Universidad de la Pacífico, refiere en su versión libre que *“las tarjetas nunca estuvieron bajo la custodia de la Tesorería y que las mismas se encontraban directamente entre los rectores en el periodo respectivo, sin tener control sobre las mismas la tesorería de la Universidad”* dicho lo anterior se puede evidenciar que de conformidad con el Manual específico de funciones y competencias laborales dentro del III acápite de Funciones Esenciales Numeral 3. Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las gestiones financieras con bancos, corporaciones, firmas y comisionistas, para el manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad, dicho lo anterior, el presente daño al erario generado surgió de la verificación del reporte de las partidas conciliatorias, Cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente y que, con recursos destinados específicamente para la educación, se realizaron pagos debitados automáticamente de la Cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico, por consumos de las tarjetas de crédito empresarial Nos. 4913306564897550 5587723056453563 a nombre de JOSE FELIX RIASCOS BENAVIDES. No obstante, se encontraba dentro de las funciones de la funcionaria FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, controlar las gestiones financieras con los bancos, y aun teniendo conocimiento de sus funciones, fue omisiva al momento de realizarlas, por consiguiente, su actuar omisivo influye en la participación del hecho generador del daño patrimonial.

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que, de acuerdo a lo manifestado por la presunta, se puede evidenciar que la presunta realizó una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna al no cumplir cabalmente con lo establecido en el


Manual de funciones en el numeral 3, el cual refiere “3. Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las gestiones financieras con los bancos, corporaciones, firmas y comisionistas para el manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad” Como se puede evidenciar, el actuar omisivo de la presunta FLOR ANLLELY RUIZ, tuvo participación en el daño patrimonial ocasionado en razón a que la misma no realizó sus funciones en el sentido de que tenía la plena obligación de controlar las gestiones financieras con los bancos y que como evidencia hace mención en su versión libre a que no era posible hacer un control fiscal del gasto del funcionario ordenador del gasto, desconociendo de esta manera los deberes encomendados que tenía bajo su cargo como Tesorera.

NEXO CAUSAL RESPECTO DE LOS IMPLIACADOS EN ESTA ACTUACIÓN

El Nexo Causal entre el Daño y la Culpa es la relación determinante y condicionante de causa-efecto exigida para poder determinar responsabilidad fiscal. El Daño Patrimonial al Estado debe ser la consecuencia de la conducta producida por el presunto responsable, en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta o que contribuya a su causación.

En el caso que nos ocupa es claro que las conductas desplegadas por los señores FELIX SUAREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, el primero en su calidad de RECTOR de la Universidad del Pacifico – UNPA – el segundo como DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la Universidad del Pacifico – UNPA – y la tercera como TESORERA de la Universidad del Pacifico – UNPA - al no tener ningún control ni seguimiento de los gastos con las tarjetas de crédito, incumpliendo con sus deberes y obligaciones y que guardan relación directa con el daño patrimonial objeto de investigación, teniendo en cuenta que se realizó pagos con las tarjetas de crédito sin que se aportaran soportes de legalización de gastos, como tampoco su relación directa con las funciones institucionales y misionales como Rector de la Universidad, en el caso de los señores FELIX SUAREZ REYES y ENVER MOSQUERA HURTADO porque tenía la obligación de realizar monitoreo, control y seguimiento al gasto destinado sobre el uso y manejo de los recursos públicos de la educación a través de las tarjetas de crédito empresarial vinculadas a la Cuenta corriente No. 030235501 del Banco de Occidente, exigiendo los adecuados soportes o tomando las medidas administrativas y legales pertinentes en caso de no ser posible su obtención, en el caso de la señora FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA porque tenía la obligación de “Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las gestiones financieras con los bancos, corporaciones, firmas y comisionistas, para el manejo eficiente de los recursos financieros de la entidad” a su vez la obligación de emitir Listado de legalizaciones pendientes y comprobantes de legalización.

Así las cosas, si los señores FELIX SUAREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, el primero en su calidad de RECTOR de la Universidad del Pacifico – UNPA – el segundo como DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la Universidad del Pacifico – UNPA – y la tercera como TESORERA de la Universidad del Pacifico – UNPA - hubieran cumplido con sus funciones y obligaciones como servidores públicos y gestores fiscales, aplicando mecanismos precisos y acertados sobre el control y seguimiento del gasto, en pro de la debida y celosa administración de los recursos públicos que demanda la gestión fiscal del patrimonio público, no se habría generado el presunto detrimento que ahora se investiga.

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 80 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

En ese contexto el Despacho determina el Nexo Causal entre la conducta desplegada por los los señores FELIX SUAREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, y el daño ocasionado al Ministerio de Educación.

Por lo expuesto, esta Colegiatura proferirá Fallo con Responsabilidad Fiscal, en forma solidaria, en contra de los señores FELIX SUAREZ REYES, ENVER MOSQUERA HURTADO y FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA, por el detrimento patrimonial ocasionado específicamente a la Universidad del Pacífico – UNPA-, el cual se dispondrá en la parte resolutive de la presente providencia, respecto del detrimento causado a la Universidad del Pacífico, correspondiente a la suma indexada de **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$21.236.265,88)**¹³

SOLIDARIDAD DE LA IMPUTACIÓN

Finalmente, se debe indicar que la responsabilidad que se imputa en los montos señalados para cada caso es de carácter solidaria, siendo rasgo característico de la solidaridad que, en la relación obligatoria, o sea en las relaciones externas (entre acreedor y deudores, o deudor y acreedores) no cabe la división de los créditos o de las deudas, según sea el caso.

El Consejo de Estado, en Sentencia de 11 de abril de 2002, Sección Tercera - Sala de lo Contencioso Administrativo, expresó al respecto:

"Cabe recordar que la doctrina y la jurisprudencia en forma unánime señalan que cuando existe concurso de conductas eficientes en producción del daño, que provengan de personas diferentes de la víctima directa, se configura una obligación solidaria..."

En el mismo sentido el Consejo de Estado en Sentencia del 15 de agosto de 2002 Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, al referirse al principio de solidaridad de las obligaciones expresó con relación al uso del principio de solidaridad:

"... No usar esta regla sino cuando se presenten dos circunstancias sucesivas: primero, que pueda probarse que más de una administración o colaborador de la misma han concurrido a la producción del daño; segundo, que no sea determinable y cuantificable económicamente la parte del daño que ha causado cada partícipe..."

Por la naturaleza del bien jurídico tutelado en el proceso de responsabilidad fiscal, el patrimonio público, su interés general y la prevalencia del interés social, cuando concurren varias conductas de agentes en la causación jurídica del daño, provenientes de la misma unidad de fuente, temporal y circunstancial, surge una relación solidaria de reparar lo causado.

En Sentencia de abril 11 de 1994, el Consejo de Estado en sección tercera indicó:

"cuando el hecho perjudicial ha sido causado por dos o más personas (...) no se produce una división de responsabilidad, como si cada una llevara apenas una parte

¹³ Actualizado de acuerdo al IPC de agosto de 2024
Calle 23 A Norte No. 3-95 Pisos 4 a 10. Edificio San Paolo. Barrio Versalles • Código Postal 760046 • PBX 2- 6552983
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Santiago de Cali • Valle del Cauca • República de Colombia

de la culpa, sino que por mandato legal surge una obligación solidaria de responder".

Por su parte el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, prevé la responsabilidad solidaria en los procesos de responsabilidad fiscal con las personas que concurran al hecho hasta la recuperación del detrimento patrimonial:

"Artículo 119. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial." (Subrayado extra-texto)

En estas condiciones, habiéndose producido el daño al patrimonio público por los responsables antes mencionados, sin que se pueda dividir a prorrata el daño producido se fallará a su cargo responsabilidad solidaria.

DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE


- **COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.; NIT. 860.002.400-2.**

De conformidad con lo establecido por el Artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, se vinculó a la Compañía Aseguradora LA PREVISORA S. A., identificada con NIT 860.002.400-2, en calidad de Tercero Civilmente Responsable, de acuerdo con la expedición de la siguiente Póliza: 300075.

Es menester resaltar que la Universidad del Pacifico, celebro contrato de seguros con la compañía **LA PREVISORA DE SEGUROS**, SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL, bajo la póliza No. 3000075, cuya vigencia inicia desde el 14/07/2015 hasta el 14/07/2016, teniéndose como riesgos amparados: Cobertura de Manejo Oficial, Delitos contra la Administración Pública, **Fallos con Responsabilidad Fiscal**, siendo tales riesgos asegurados en \$25.000.000, y expedida la misma, se mantendrá la vinculación de garante de la Compañía de Seguros La PREVISORA S.A., teniendo en cuenta que ampara el manejo de los ex funcionarios de la Universidad investigados durante la época de los hechos de 2015 a 2016.

Resulta necesario mencionar, que, a través de radicado No. 2024ER0098217 del 10 de mayo de 2024, se recibió respuesta de la compañía LA PREVISORA S.A COMPANHIA DE SEGUROS, al requerimiento No. 2024EE0085476, allegando los archivos denominados “2_39_65162_3000075” Póliza No. 3000075 y “CD 26149-OK” constancia de disponibilidad presupuestal de fecha 09 de mayo de 2024, en el cual el tercero civilmente responsable expresó la siguiente:

*“Revisado el sistema se observa que a la fecha La Compañía ha efectuado pagos con cargo de la vigencia anteriormente relacionada por la suma de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$22.500.000)**, razón por la cual hay disponibilidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000)** de valor asegurado, suma a la cual se le debe descontar el valor del deducible pactado contractualmente”.*

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 82 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

Por lo expuesto, se tiene que el tercero civilmente responsable, estará obligado en razón a la póliza No. 3000075 al pago de la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS \$2,500,000 menos el deducible pactado en la póliza. Lo anterior en razón a que se encuentra probada, la existencia de daño al patrimonio del estado, Culpa grave por parte de los agentes que incurrieron y contribuyeron con la generación del daño y un nexo de causalidad entre las dos mencionadas.

En consideración a los planteamientos anteriormente desarrollados, se debe ordenar entonces la incorporación al fallo con responsabilidad fiscal de la la póliza No. 3000075, cuya vigencia inicia desde el 14/07/2015 hasta el 14/07/2016, teniéndose como riesgos amparados: Cobertura de Manejo Oficial, Delitos contra la Administración Pública, **Fallos con Responsabilidad Fiscal**, siendo tales riesgos asegurados en \$25.000.000, y expedida la misma.

Lo anterior por cuanto la Póliza N°3000075 con sus anexos, modificaciones y condiciones generales tiene cubrimiento de los hechos irregulares materia de la presente actuación.


En mérito a lo anteriormente expuesto, **LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,**

RESUELVEN

ARTICULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL a título de culpa grave en cuantía indexada de **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$21.236.265,88)¹⁴** y en forma solidaria, en contra de las siguientes personas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia:

- FELIX SUAREZ REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.485.434, Rector en propiedad de conformidad a la Resolución del Consejo Superior No.09 del 23 de diciembre de 2015, periodo comprendido entre el 23 de diciembre del 2015 al 19 de febrero del 2016.
- ENVER MOSQUERA HURTADO**, identificado con cedula de ciudadanía No 16.499.840 en calidad de Director Administrativo y financiero nombramiento en planta de conformidad a la Resolución No.231 del 27de marzo de 2015, periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2015 al 24 de febrero del 2016.
- FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA**, identificada con cedula de ciudadanía No 66.943.241 en calidad de tesorera, nombramiento en (ENCARGO) de conformidad a la Resolución No 2040 del 5 de mayo de 2015, Resolución No 310 del 16 de julio de 2015, Resolución No 317 del 21 de julio de 2015, Resolución No 002 del 2 de enero de 2016 periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2015 hasta el 23 de marzo de 2016.

¹⁴ Actualizado de acuerdo al IPC de agosto de 2024

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 83 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR como tercero civilmente responsable a la compañía aseguradora, incorporando al fallo con responsabilidad la siguiente póliza:

LA PREVISORA S.A., NIT 860.002.400-2 Póliza No. 3000075, vigencia: 14-07-2015 al 14-07-2016, riesgos amparados: Cobertura de manejo oficial, delitos contra la administración pública, **fallos con responsabilidad fiscal**, Valor asegurado: \$25,000,000, Fecha expedición: 14-07-2015. Riesgos amparados: 1. COBERTURA DE MANEJO OFICIAL valor asegurado por \$25,000,000, 3. **FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL** valor asegurado por \$25,000,000.


Póliza la cual cuenta con una disponibilidad presupuestal de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS \$2,500,000.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente providencia de conformidad con los artículos 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, a través del Grupo de la Secretaría Común de la Gerencia Colegiada del Valle del Cauca, a los señores:

1. **FELIX SUAREZ REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.485.434, Dirección: CARRERA 57 A CALLE 3ª # 2-48, Buenaventura Valle correo: fesurez@hotmail.com o investigadorfelixsuarez@gmail.com, quien autorizó notificación vía correo electrónico.
2. **ENVER MOSQUERA HURTADO**, identificado con cedula de ciudadanía No 16.499.840, Dirección: CALLE 4 # 39-35, Buenaventura Valle Correo: envermsqr@gmail.com, quien autorizó notificación vía correo electrónico.
3. **FLOR ANLLELY RUIZ GARCIA**, identificada con cedula de ciudadanía No 66.943.241, Dirección: Carrera 62 # 1-31 Barrio El Dorado, Buenaventura – Valle, Cel: 317-376-6754. No autoriza notificación vía correo electrónico.

ARTICULO CUARTO: Notificar en iguales términos personalmente la presente providencia a **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con NIT: 860.002.400-2, a través de su apoderado de confianza, GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114, Dirección: Avenida 6 A Bis No. 35 N - 100, Oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape de la ciudad de Cali, Correo: notificaciones@gha.com.co o notificacionesjudiciales@previsora.gov.co, apoderado autoriza notificación vía correo electrónico.

ARTICULO QUINTO: RECURSOS contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante este Cuerpo Colegiado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 610 de 2000 y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el cual debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia en el correo electrónico cgrcgr@contraloria.gov.co, conforme lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y en los puntos 2.3 y 3.6 del Memorando No. 2020IE0039600 del 03-07-2020 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

 CONTRALORÍA General de la República	FALLO No. 10
	FECHA: Octubre 2 del 2024
	Página 84 de 85
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2020-00041.	

ARTICULO SEXTO: MANTENER las medidas cautelares decretadas mediante auto No. 673 del 28 de septiembre de 2022, las cuales continuarán vigentes hasta el Proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: En firme y ejecutoriada la presente providencia, súrtanse los siguientes traslados y comunicaciones:

- Remitir copia auténtica del fallo a la dependencia que deba conocer del proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con el Artículo 58 de la ley 610 de 2000.
- Solicitar a la Contraloría Delegada en Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a las personas a quienes se les falló con Responsabilidad Fiscal.
- Remitir copia íntegra del presente proveído a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
- Remitir copia íntegra del presente proveído a la Entidad afectada, para que se surtan los registros contables.

ARTÍCULO OCTAVO: ARCHIVO FÍSICO. Cumplido lo anterior y una vez ejecutoriado el presente fallo, se procederá al archivo físico del expediente, de conformidad con las normas de gestión documental.

ARTÍCULO NOVENO: El presente Acto Administrativo y los documentos que hacen parte del Expediente, surtirán los trámites de Gestión Documental, Archivo Físico y Archivo Electrónico por parte del Profesional Sustanciador en la plataforma SIREF o la que para efecto designe la Contraloría General de la Republica.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,



EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO
Gerente Departamental – Directivo Ponente




SANDRA PATRICIA RIVERA VELASCO
Contralora Provincial



GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO
Contralor Provincial



JAIRO MANUEL ESTRADA MOSQUERA
Contralor Provincial

Proyectó	:	Diego Javier Zamora Lozano - Profesional Sustanciador.
Revisó	:	30/09/2024 Monica Fernanda Gómez Salazar - Coordinadora de Gestión (E) 
Ponente	:	01/10/2024 Eaird Hernando Tejeda Quintero
Aprobado	:	Sesión extraordinaria acta No 79 del 2 de octubre del 2024 del Comité de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle.
Fecha	:	